

**DERECHO Y POLÍTICAS AMBIENTALES EN LAS ISLAS BALEARES (pp. 2-
25)**

—

DRET I POLÍTIQUES AMBIENTALS A LES ILLES BALEARS (pp. 26-48)

JOSÉ MANUEL GÓMEZ GONZÁLEZ

Departament d'Urbanisme i Territori. Consell Insular de Mallorca

—

Consultor

Universitat Oberta de Catalunya

Sumario: 1. Introducción. 2. Actividad legislativa. 2.1. La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo. 2.2. Anteproyecto de Ley de Transportes y Movilidad. 2.3. Anteproyecto de Ley Agraria. 3. Política sobre patrimonio ambiental y cambio climático. 3.1. El Plan Forestal de las Islas Baleares. 3.2. Plan de Acción de Mitigación contra el Cambio Climático en las Islas Baleares (2013-2020). 4. Política energética. 4.1. Las polémicas prospecciones submarinas. 4.2. Más sobre la incineración de residuos como combustible sólido recuperado. 5. Otras noticias ambientales: 5.1. La restauración forestal de la sierra de Tramuntana. 5.2. La oposición a la política de carreteras del Consell de Menorca. 5.3. Extracción de lodos contaminados en el puerto de Maó-Mahón. 5.4. Políticas de conservación en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera: las líneas eléctricas. 5.5. Llamada de atención por la política de prevención de incendios forestales.

1. Introducción

Somos muchos los que tenemos la sensación de que la crisis económica está sirviendo de pretexto para devaluar las políticas ambientales y, por extensión, el ordenamiento jurídico sobre la materia. Por poner un ejemplo concreto, podemos constatar que en España la lucha contra el cambio climático se enfoca con una penalización a la producción de energías renovables: esto es un contrasentido y está fuera de toda lógica. En paralelo, asistimos a la controversia que han despertado las prospecciones en busca de petróleo y gas en los subsuelos marinos de nuestro entorno mediterráneo, iniciativa que ha levantado una tormenta ciudadana con una ambigua respuesta política que deja entrever que las contradicciones de los gobernantes se originan, a menudo, en las presiones y los intereses de empresas y grupos de influencia diversa. Penalizar las energías renovables y poner en peligro los fondos marinos y el litoral en busca de exiguas reservas de combustibles fósiles que en buena parte son el origen del calentamiento global que sufrimos es una paradoja ambiental de difícil justificación. Por este motivo, reservamos un apartado específico a introducir el conflicto que se ha producido al “destaparse” una retahíla de autorizaciones de prospecciones sísmicas submarinas en el Mediterráneo. La oposición en las Islas Baleares contra esta técnica es muy transversal y ha encontrado eco en segmentos sociales de votantes tanto de derecha como de izquierda, lo que preocupa significativamente al partido que gobierna en la Comunidad Autónoma y en las islas de Mallorca, Menorca e Ibiza (que es el mismo que gobierna en Madrid).

También los objetivos de lucha contra la crisis, reactivación de la economía y simplificación de la burocracia se han traducido en una relajación de las medidas normativas preventivas, en especial la evaluación ambiental (tanto la estratégica como la de proyectos) y las técnicas de autorización. En las Islas, además de los efectos de las

modificaciones introducidas en la legislación de control preventivo ambiental, han proliferado las normas que incorporan más y más excepciones a estos controles. Desde la legislación sectorial se está rompiendo la estructura del sistema de prevención, desplazando y marginando el papel de la planificación (ordenación territorial, urbanística y ambiental), de los mecanismos de autorización (con un abuso de las declaraciones responsables) y de los instrumentos de control ambiental previo (evaluación ambiental estratégica y evaluación de impacto ambiental). En este sentido, la normativa turística, agraria y de comercio, entre otras, ha iniciado un camino de prioridades que introduce un gran número de dispensas y excepciones a las reglas generales urbanísticas y de ordenación territorial que, sin convertir en subsidiarios estos dos subsistemas, rompen una tradición normativa de más de medio siglo.

Así pues, como corolario a todo esto, tenemos que destacar el retroceso en la protección territorial, patrimonial y del paisaje que se está produciendo en las Islas Baleares a raíz de un conjunto de leyes sectoriales que pierden de vista el interés general y los mandatos constitucionales. La estructura del sistema normativo se ve fuertemente comprometida con visiones muy parciales que pierden de vista el concepto de conjunto e incorporan regímenes excepcionales que enervan las reglas generales; al final, las excepciones son la regla, con clara vulneración de principios elementales como el de igualdad, legalidad o corrección de las perturbaciones de los regímenes jurídicos (al promoverse las legalizaciones y el premio a las infracciones y alteraciones de las normas), entre otros. Las nuevas leyes que ordenan el sector turístico o el urbanismo, o que ordenarán el sector agrario o minero, son un ejemplo de pérdida de vista de la concepción sistémica del derecho positivo y de legislar contra el interés general y en favor de los intereses sectoriales o particulares. También sobre esto tendremos que profundizar.

Con todo, la política forestal despierta con luces y sombras después de unos años de inercias derivadas del desinterés. Por una parte, valoraremos los aspectos positivos de contar con un nuevo plan forestal en las Islas y, por otra, tendremos que evaluar la contradicción que supone el abandono de las acciones preventivas en relación con los incendios forestales según la vieja máxima de que los incendios “se apagan” en invierno con intensas tareas de protección y de prevención. Igualmente, el incremento de hectáreas quemadas en 2013 cuestiona esta política, como también la relativa a la distribución de los recursos de extinción de los incendios forestales.

Por otro lado, las noticias de carácter ambiental se han reducido a lo largo de este último semestre; salvo cuestiones marginales y de carácter menor, no podemos destacar gran cosa en cuanto a políticas ambientales. Con todo, podemos extraer una serie de noticias de interés que suponen un contrapunto a la obsesión actual de poner el potencial ambiental al servicio de la industria turística. Como muestra, podemos destacar la potenciación del uso turístico y de visita del Parque Nacional del Archipiélago de Cabrera con la apertura de un refugio para visitantes que aprovecha parte de las viejas instalaciones militares. A pesar de este reconocimiento de los valores ambientales como un elemento de atracción turística, el debate de la Ecotasa sigue siendo una causa perdida, tal como hemos podido comprobar en un reciente debate en el Parlamento de las Islas que tuvo lugar en la primera semana de mayo.

Finalmente, destacaremos una serie de noticias con diferente repercusión ambiental en materia de residuos, energía, contaminación marina, alteración del litoral, movilidad o política de conservación de los espacios naturales que también plantean visiones controvertidas y no exentas de polémica.

Estos y otros temas los podremos examinar con más amplitud a continuación.

2. Actividad legislativa

2.1. La Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo

Baleares ha logrado al fin un hito histórico: aprobar una ley del suelo propia que pretende sistematizar la regulación del urbanismo desde una perspectiva clásica, a pesar de que, cuando se analiza en profundidad, se puede comprobar que no resuelve todo el conjunto del régimen de ordenación del suelo. Sin embargo, y aunque probablemente habrá que introducir modificaciones en un futuro próximo, podemos considerar que se ha dado un paso muy importante que, cuando menos, fija las nuevas bases legislativas del futuro urbanístico de las Islas.

A raíz de la Sentencia 61/1997 del Tribunal Constitucional, la legislación aplicable en las Islas retrocedió nuevamente al régimen del texto refundido de 1976, complementado con algunas leyes autonómicas específicas. Hacía falta, pues, dotar el archipiélago de un régimen propio adaptado a los nuevos tiempos. Así, desde la legislatura 1999-2003 se han sucedido diferentes propuestas de Ley del Suelo en Baleares; la primera propuesta (la Ley reguladora de la ordenación urbanística en las Islas Baleares) se truncó,

precisamente, con la finalización de aquel período y no tuvo continuidad. En el año 2006 se inició la tramitación del Anteproyecto de Ley del Régimen del Suelo y de la Vivienda de las Islas Baleares, una propuesta que tampoco concluyó en el Parlamento. Con posterioridad, en la legislatura 2007-2011 se retomó un proyecto de ley ambicioso que pretendía ordenar el subsistema de la ordenación territorial con el subsistema urbanístico, constituyendo una ley de ordenación del territorio y de regulación de la actividad urbanística de las Islas Baleares que, con cerca de trescientos artículos, establecía un régimen integral. En paralelo se había elaborado un texto alternativo que procedía de trabajos realizados la legislatura anterior y que tampoco fue tramitado. Finalmente, con el cambio de Gobierno (2011-2015) se trabajó en una línea menos ambiciosa (que fue adoptando complejidad en los sucesivos borradores) sobre la base de un texto de unos ciento noventa y cinco artículos que se ha bautizado con el nombre de Ley reguladora de la ordenación y uso del suelo. Después de más de un año de trabajo y tramitación, al final el texto fue aprobado el mes de marzo con el nombre de Ley de Ordenación y Uso del Suelo (Ley 2/2014, de 25 de marzo, de Ordenación y Uso del Suelo [LOUS]), texto que entró en vigor el 30 de mayo de 2014¹.

El objeto de la Ley es establecer el régimen jurídico general de la intervención administrativa en materia urbanística desde una perspectiva clásica, quizás poco innovadora y escasa en propuestas imaginativas. Igualmente, se pretende definir el régimen urbanístico de la propiedad del suelo, de acuerdo con la función social que tiene atribuida y en desarrollo del régimen estatal previsto en el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley del Suelo.

Efectivamente, la Ley 2/2014 sigue un esquema correcto pero de corte clásico inspirado en la regulación de la década de 1970. Los ejes esenciales que estructuran el régimen urbanístico del suelo (desplegando así la legislación básica) los conforman la regulación del planeamiento, la gestión y la disciplina, con la introducción de apartados específicos sobre intervención en el mercado del suelo, sobre el ejercicio de las facultades relativas al uso y la edificación del suelo, y también sobre el régimen de las expropiaciones urbanísticas (que a su vez son aspectos que se ubicaban en el subsistema de la gestión urbanística). Igualmente, debemos destacar la inclusión de numerosas disposiciones adicionales, transitorias y finales, que suman 35 normas más, algunas de ellas con enorme trascendencia y complejidad como la que esconde una amnistía encubierta en

¹ [BOIB número 043, de 29 de marzo de 2014](#)

suelo rústico. Algunos expertos ya se han manifestado en el sentido de que estamos ante una ley poco innovadora y con medidas injustas, como por ejemplo la llamada “tasa del perdón” o amnistía encubierta para legalizar edificaciones irregulares; hay quien considera que estaríamos ante un agravio normativo que premia al infractor y deja en una situación de perplejidad a las personas que han respetado la legalidad.

De una primera valoración sucinta podríamos decir que la Ley ha perdido la oportunidad de integrar mejor los dos grandes subsistemas de la actividad administrativa en el territorio como son la ordenación territorial y el urbanismo. Por otro lado, tampoco ha sabido integrar uno de los elementos esenciales del urbanismo: dar cumplimiento al mandato del artículo 47 de la Constitución española en relación con el derecho a una vivienda digna. Si atendemos al hecho de que uno de los objetivos esenciales del urbanismo es satisfacer la necesidad de viviendas de la población, se observa la carencia de una regulación más osada en este sentido. De hecho, en borradores redactados por anteriores gobiernos estas cuestiones (la integración de la ordenación territorial, el urbanismo y la vivienda) habían constituido los objetivos centrales de la norma. La experiencia de las décadas de 1950 y 1960 demostró la necesidad de unificar las políticas de urbanismo con las de vivienda, y ambas había que ordenarlas sobre el esquema básico de la corrección de las tensiones sobre el territorio (función destinada a la ordenación territorial).

Por otro lado, el precedente de determinadas previsiones de la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, que fueron cuestionadas por la Comisión Bilateral de Cooperación entre la Administración general del Estado y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares ha condicionado algún redactado final en la Ley 2/2014. No obstante, se han mantenido algunas previsiones que podrían ser de dudosa constitucionalidad; deberemos estar atentos en un futuro para comprobar si finalmente se interpone algún recurso ante el Tribunal Constitucional o surge alguna cuestión de inconstitucionalidad de la aplicación de los aspectos más controvertidos.

Las previsiones que más atención están acaparando en los primeros días desde la publicación de la Ley son la disposición adicional octava y la disposición transitoria décima.

Durante la tramitación de la Ley también había provocado controversia la redacción del artículo 26 en relación con la disposición adicional sexta, dado que no parecían encajar

mucho sus previsiones con lo que se disponía en el artículo 13 del RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprobó el texto refundido de la Ley del Suelo. La posible contradicción normativa fue resuelta por el apartado tercero de la disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, que suprimió el señalado artículo, especialmente relevante aquí en cuanto a la definición de asentamiento tradicional en el medio rural. El artículo 26 de la Ley 2/2014 posibilita la consideración como urbanos de los asentamientos existentes antes de la entrada en vigor de la Ley 7/2012, de 13 de junio, de medidas urgentes para la ordenación urbanística sostenible, con independencia de que sean o no tradicionales.

La disposición adicional octava establece, dentro del margen de la previsión concreta recogida en el artículo 26 en cuanto a los asentamientos en el medio rural, un régimen excepcional para posibilitar que el planeamiento urbanístico general pueda prever ámbitos de suelo urbano donde no resulte exigible la existencia de red de saneamiento, siempre que se cumpla algún requisito como los siguientes: que la ejecución de la red de saneamiento suponga, por las características geomorfológicas de la zona o por la baja intensidad del núcleo, un coste manifiestamente elevado; o que su implantación no suponga ninguna ventaja para el medio ambiente. Esta disposición se inspira en una interpretación particular de la normativa europea sobre la materia. La disposición prevé que en estos casos el planeamiento tendrá que fijar la instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales como depuradoras de agua o fosas sépticas estancas y homologadas. El peligro de esta previsión es que se pueda convertir en la regla general, especialmente en la isla más problemática, Ibiza, o en núcleos de la sierra de Tramuntana en Mallorca.

En cuanto a la disposición transitoria décima, podríamos empezar diciendo que estamos ante una previsión normativa que exigiría un monográfico entero. Se trata de una fórmula llena de incertidumbres y que nadie sabe exactamente cómo se resolverá en la práctica; lo que ya podemos avanzar es que puede comportar agravios comparativos entre las diferentes islas. La norma establece un procedimiento extraordinario de incorporación a la ordenación de edificaciones existentes en suelo rústico; es la llamada amnistía urbanística o “tasa del perdón”.

La disposición establece que “las edificaciones existentes en suelo rústico, respecto de las cuales a la entrada en vigor de esta ley ya no procediera adoptar las medidas de restablecimiento de la legalidad urbanística, por manifiesta prescripción de la infracción

según la normativa de aplicación, se podrán incorporar a la ordenación en el plazo máximo de tres años, con todos los derechos y deberes inherentes a las obras realizadas con licencia”.

El carácter de imprescriptible de las infracciones en suelo de especial protección se resuelve de la manera siguiente: «Para la aplicación de lo anterior en terrenos incluidos en el ámbito de la Ley 1/1991, de 30 de enero, de espacios naturales y de régimen urbanístico de las áreas de especial protección de las Illes Balears, se entenderá que ha prescrito la infracción si se acredita la existencia de la edificación con anterioridad al día 10 de marzo de 1991, siempre que no se haya efectuado en la misma, con posterioridad, un cambio de uso».

El problema de aplicación de la DT 10.^a radica en el mecanismo que se ha ideado en diferentes fases. La normativa de la Ley requiere una derivación reglamentaria y un procedimiento administrativo que no está demasiado claro cómo se resolverán. La norma ideada por el legislador dice: “A estos efectos, el procedimiento se sustanciará por la persona interesada ante el ayuntamiento correspondiente, donde se solicitará la legalización junto con la documentación gráfica y escrita relativa a la edificación en su estado real y proyecto de incorporación de medidas de adecuación a las condiciones generales de integración ambiental y paisajística que la ordenación, si procede y a efectos de esta incorporación, establezca, sin que les sean de aplicación los parámetros y las condiciones urbanísticas aplicables con carácter general a las edificaciones en suelo rústico”. En este sentido, no queda claro si hará falta un proyecto completo de legalización suscrito por un facultativo arquitecto y debidamente visado, o, por el contrario, será suficiente con una memoria y unos simples croquis (los responsables de la Consejería de donde ha emanado el proyecto de ley no saben responder y lo derivan todo al desarrollo reglamentario o a lo que decidan los ayuntamientos).

Así, en este sentido, la disposición que comentamos establece que “entrará en vigor una vez que, en el ámbito insular respectivo, haya sido adoptado acuerdo plenario del consejo insular por mayoría absoluta. Este acuerdo plenario se publicará en el Butlletí Oficial de les Illes Balears y el plazo de tres años a que se refiere el apartado 1 de la presente disposición comenzará a contar a partir de dicha publicación”. Hay que presumir que el legislador está hablando de un desarrollo reglamentario más que de un acto administrativo, dado que sería un caso insólito someter una ley a una entrada en

vigor en diferido y a expensas de un simple acuerdo plenario que podría no producirse nunca.

En cuanto a la prescripción de las infracciones, requisito sine qua non para que pueda operar la “tasa del perdón”, hay que tener presente el cómputo fijado “a los únicos efectos de aplicar el procedimiento previsto en esta disposición, cuando la edificación que se pretende legalizar tenga un uso prohibido”; el inicio del cómputo del plazo de prescripción en cuanto a la infracción para este uso se entenderá iniciado en el momento en que se acredite su implantación. Esta misma regla se aplicará a los casos de edificaciones que hayan sido objeto de cambio de uso con posterioridad a su construcción.

Por otro lado, las limitaciones para la amnistía urbanística siguen con las previsiones siguientes: por una parte, se nos dice que “la anterior incorporación no resultará de aplicación a las edificaciones que, de acuerdo con el planeamiento vigente, queden sujetas a expropiación, cesión obligatoria y gratuita o derribo o cuando en las edificaciones se desarrollen actividades sujetas a la previa declaración de interés general”; por otra, se establece que “no resultará de aplicación a aquellas edificaciones existentes situadas en dominio público y en las servidumbres derivadas de la legislación de costas”; y, finalmente, hay que tener presente que “la legalización estará sujeta al pago de las mismas tasas y de los mismos impuestos previstos en la normativa para las nuevas edificaciones. Asimismo, la persona interesada deberá abonar al ayuntamiento una prestación económica. Las cantidades ingresadas por este concepto deben destinarse a la adquisición, la recuperación, la protección y la gestión sostenible de espacios y recursos naturales o su incorporación al patrimonio municipal de suelo”.

En cuanto a la configuración de la “tasa del perdón”, se establece que la prestación económica se fijará por aplicación de una serie de porcentajes con relación al coste de ejecución material de la edificación legalizada, de conformidad con lo que se establezca en el expediente de legalización. Así, la disposición prevé los pagos siguientes: el 15% si la legalización se realiza en el primer año de vigencia de este procedimiento; el 20% si se realiza en el segundo año; y el 25% si se realiza en el tercer año.

No deja de ser curioso que esta disposición sea la que más expectación ha causado de la Ley y la que más líneas de artículos de opinión ha generado.

2.2. Anteproyecto de Ley de Transportes y Movilidad

Disponemos del embrión de otra norma de rango legal que marca una nueva tendencia, y es que el Gobierno ha dado luz verde al Anteproyecto de Ley de Transportes Terrestres y Movilidad. Se propone con este texto la regulación autonómica en materia de transporte, urbano e interurbano, adecuada a las particularidades territoriales de las islas. Los redactores de la propuesta afirman que el texto aprobado es fruto del consenso surgido tras dos años de trabajo conjunto entre la Dirección General de Transportes, las diferentes administraciones implicadas y todos los representantes del sector del transporte de las Islas Baleares, así como de las organizaciones de usuarios y consumidores.

El borrador se ha elaborado con una doble intención: por una parte, regular determinados aspectos de las actividades de transporte terrestre que hasta ahora se regían por la normativa estatal para adecuarla a las necesidades de nuestra comunidad autónoma y a la normativa europea vigente; por otra, regular el transporte urbano de viajeros de acuerdo con el contenido de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 27 de junio de 1996 y aprobar una normativa que ayude a racionalizar y a mejorar la movilidad de las personas mediante la planificación de las infraestructuras de transportes en el ámbito territorial de nuestra comunidad, en el de cada isla y en el de los municipios que el Plan de Movilidad establezca.

Esta propuesta se empezó a elaborar a finales de 2011 y ha superado tres períodos de exposición pública en los cuales se han presentado unas setenta alegaciones. El texto formulado se compone de cuatro títulos y trece capítulos, ciento noventa y cinco artículos y nueve disposiciones adicionales, cinco transitorias, una derogatoria y ocho finales. Habrá que esperar al texto definitivo que salga del Parlamento para ver cómo queda la estructura final.

Del examen de la propuesta expuesta públicamente podemos destacar algunas novedades que responden a demandas históricas, como por ejemplo que se fije a siete el número máximo de plazas para los taxis, en vez de las cinco actuales. El sector turístico, los usuarios locales y los mismos transportistas habían reclamado la medida en reiteradas ocasiones; con la nueva regulación se abrirá la posibilidad de que los ayuntamientos otorguen licencias temporales de taxi.

Los redactores han querido destacar el hecho de vivir en una comunidad eminentemente turística, y por eso proponen actualizar la normativa de transporte discrecional para adaptarla a los medios telemáticos que actualmente se imponen en el mercado de la contratación del transporte de viajeros. Además, en cuanto al transporte turístico y discrecional, la Ley introduce la posibilidad de contratar el servicio por plaza de forma anticipada para los trayectos con origen o destino a los puertos o aeropuertos de las Baleares.

En relación con el transporte regular de viajeros, la normativa se adecúa al reglamento europeo, de obligado cumplimiento, y también simplifica los trámites administrativos para facilitar las extensiones de líneas existentes. Además, se actualiza la normativa relativa a los trenes turísticos y se regulan por primera vez los vehículos motorizados de menos de cuatro ruedas homologados para el transporte de viajeros. Hay que destacar también que la nueva Ley garantiza servicios básicos para Formentera como las conexiones con el aeropuerto de Ibiza o con los servicios hospitalarios de referencia.

En el ámbito ferroviario, algunas de las novedades que presenta la Ley son la reducción de ocho a cinco metros de la zona de dominio público de ambos lados de la plataforma ferroviaria en zonas urbanas consolidadas, para reducir así las expropiaciones en caso de actuaciones, y la definición, por primera vez, de los derechos y las obligaciones de los usuarios y del operador del servicio. Asimismo, como no podía ser de otro modo, se regula el transporte ferroviario adecuándolo a las dimensiones territoriales insulares, así como también el transporte tranviario, que hasta ahora no se había regulado.

En cuanto a la inserción del sector del transporte en la ordenación territorial y el urbanismo, hay que destacar que la Ley servirá para fijar los objetivos del Plan Director Sectorial de Transporte de las Islas Baleares y para regular de forma sostenible y racional la ordenación de la movilidad terrestre de las islas. En este sentido, la Ley exigirá un estudio de viabilidad económica y social a las futuras infraestructuras vinculadas al transporte terrestre que supongan una inversión de más de diez millones de euros; esta previsión podría tener en un futuro una gran transcendencia ambiental.

2.3. Anteproyecto de Ley Agraria

Recientemente se presentó ante el Consejo Agrario Interinsular el primer borrador de la futura Ley Agraria de las Islas Baleares. A diferencia de otras comunidades autónomas, las Islas Baleares no habían abordado hasta ahora la promulgación de una ley que, con un enfoque global, regulara la agricultura y el desarrollo rural, un sector que sufre de primera mano los inconvenientes de la insularidad, que se evidencian en una escasa rentabilidad de las explotaciones agrarias y el consiguiente abandono progresivo de estas y, en general, del medio rural. Esta situación marcará un cambio de tendencia normativa con el fin de reconvertir el sector agrario en un instrumento económico poliédrico y multifuncional. Desde la Consejería se manifestaba que estas islas necesitan seguir manteniendo su territorio y que los agricultores puedan seguir viviendo dignamente de la actividad que ejercen, y esto es precisamente lo que parece pretender este anteproyecto.

Así, algunos de los principales objetivos del texto propuesto son hacer frente a los problemas de baja rentabilidad de la agricultura balear, y las soluciones que pretende incorporar van en la dirección de fomentar la inversión y la ocupación en el sector primario (a pesar de que lo hace con la terciarización del campo). Las recetas se diseñan con el propósito de añadir valor al patrimonio rural y facilitar la gestión activa del territorio y del medio ambiente con el mantenimiento de la actividad agraria. Uno de los objetivos de la propuesta es proporcionar herramientas al sector para que pueda perdurar en el tiempo, con la responsabilidad añadida de conservadores del paisaje. Hay que tener presente que en las Baleares y Pitiusas el paisaje tiene una importancia significativa como reclamo turístico y de calidad ambiental, por eso no se puede obviar el hecho de que el campesinado sea el responsable de la preservación del 70 por ciento del territorio insular.

Las recetas a las que hacíamos mención suponen un refuerzo del sector primario con políticas complementarias más propias de los sectores secundario o terciario (servicios). De esta forma, la futura Ley se propone regular nuevas actividades complementarias de diversificación de la actividad agraria como, por ejemplo, las *agroestancias*, los *agrorrefugios*, la *agrocultura*, la *agroenergía*... Igualmente, facilitará la implantación de instalaciones y actividades relacionadas con el mundo de los equinos (circuitos, hípicas, hipódromos, campos de polo, etcétera). En la misma línea, el texto regula y propicia la venta directa de productos agroalimentarios para facilitar la puesta en el

mercado de productos sin intermediarios, cosa que mejorará el precio tanto para el productor como para el consumidor.

Por otro lado, la propuesta expuesta también regula la posibilidad de crear la figura de las reservas y cotos de recursos silvestres como instrumento de mantenimiento y gestión activa de las explotaciones forestales. Sin embargo, no queda demasiado claro cuáles serán las consecuencias y los compromisos que se desprenderán con relación a la implantación de estas actividades. La intención, parece, es que se exija un compromiso de permanencia dentro del sector para dar continuidad a la conservación del territorio y solo se permitiría en actividades agrarias preferentes.

También podemos comprobar que el nuevo régimen de diversificación da facilidades para el impulso y el desarrollo de la actividad agraria y complementaria. Estas actividades quedarán reconocidas como uso admitido en el medio rural y no estarán sometidas a la declaración previa de interés general que permite la legislación urbanística para el suelo rústico; de esta forma, las actividades reguladas en la Ley Agraria entran dentro de un régimen general de exoneración del cumplimiento de determinadas condiciones y limitaciones que imponía la normativa reguladora del suelo. De este régimen de excepción se beneficiarán las agroindustrias que demuestren tener una producción activa, siempre que cuenten con la autorización pertinente de la consejería competente en materia de agricultura, eliminándose el control que ejercían los consejos insulares mediante las declaraciones de interés general derivadas de la Ley 6/1997, de 8 de julio, del Suelo Rústico de las Islas Baleares. La Ley también posibilita el cambio de uso de edificaciones existentes para la instalación de industrias de transformación agraria para el proceso de la producción propia o para hacer actividades complementarias de diversificación agraria, siguiendo el modelo de otros países como, por ejemplo, Francia.

Con relación al hecho insular, la propuesta quiere exigir al Estado y a la Unión Europea su reconocimiento y la necesidad de recompensar los inconvenientes que este contexto plantea al sector. En esta misma línea, el texto introduce la regulación por ley de la obligación del Gobierno de consignar presupuestariamente las dotaciones económicas necesarias para garantizar la cofinanciación de las diferentes líneas de ayuda del sector; con todo, esta previsión tiene carácter programático y está supeditada a la disponibilidad presupuestaria (como ocurre en otros supuestos de legislación sectorial).

Como complemento a todo lo anterior, podemos constatar la previsión de normas dirigidas al fomento de la incorporación de los jóvenes y las mujeres al sector, lo cual es una buena iniciativa. También la propuesta formula otras iniciativas como las siguientes: impulsar la producción local y las marcas de calidad; regular el régimen de declaración de zonas catastróficas; crear la Estrategia Balear de Mejora del Conocimiento Agrario con el objetivo de mejorar el conocimiento agrario y agroalimentario de las Islas Baleares; o implantar la regulación y el control, por primera vez, de la producción, el almacenamiento y la gestión de los estiércoles.

El borrador hecho público del Anteproyecto contiene 11 títulos y un total de 172 artículos, además de cuatro disposiciones transitorias, seis finales y una derogatoria y un anexo.

3. Política sobre patrimonio ambiental y cambio climático

3.1. El Plan Forestal de las Islas Baleares

Como hemos comentado antes a propósito de la propuesta de Ley Agraria, el paisaje de las Islas Baleares es considerado de importancia estratégica como reclamo turístico. Esto implica que, además del objetivo de lograr una buena calidad de la geografía agrícola, hace falta también fomentar la ordenación y gestión de las masas forestales con el fin de garantizar la conservación integral del paisaje natural.

La ordenación de los bosques deriva de una tradición normativa y técnica que ha desarrollado diferentes alternativas en función de los objetivos temporales y las finalidades productivas o de conservación. La Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes, prevé una cascada de instrumentos de ordenación forestal que sitúa en la cúspide la llamada Estrategia Forestal Española, que hay que completar con el Plan Forestal Español, los planes de ordenación de los recursos forestales (PORF) de las comunidades autónomas y las directrices básicas comunes para la ordenación y el aprovechamiento de los bosques que se desarrollan por las instrucciones autonómicas.

Dentro de este marco normativo, el Gobierno de las Islas Baleares ha decidido recuperar la figura del plan forestal en sustitución de las estrategias forestales que se habían elaborado en otras épocas. El Plan Forestal de las Islas Baleares se presenta como un documento que tiene que servir de referencia para la política forestal de nuestra comunidad autónoma para los próximos años, pero no queda claro si se adopta con la

naturaleza de PORF, ni qué mecanismo de aprobación se utiliza ni con qué rango normativo se aprueba el Plan.

Los redactores afirman que “las Islas Baleares era la única comunidad autónoma sin un plan forestal”, y enfatizan la necesidad de una “conservación y gestión activas” de los bosques “frente a una conciencia proteccionista que muchas veces conduce al abandono”.

Analizando la génesis y elaboración del Plan, podemos comprobar que el documento presentado es fruto de un proceso de participación social. Los datos consultados patentizan que, desde noviembre de 2012, más de 375 instituciones y ciudadanos han participado en diez sesiones colectivas de trabajo y veinticuatro reuniones con especialistas ambientales y gestores forestales. El Plan Forestal establece una estrategia para afrontar de manera participativa y consensuada los retos que presenta la futura gestión de los bosques y las superficies forestales de las Islas Baleares, y prevé una vigencia de veintiún años para alcanzar los tres próximos períodos financieros de la Unión Europea (2014-2020, 2021-2028 y 2029-2035).

El Plan comprende todo el ámbito forestal de las Islas Baleares, constituido por más de 222.000 hectáreas de superficie forestal, el 44% del territorio insular. Además, por primera vez se estudia al detalle la estructura de la propiedad forestal de la Comunidad Autónoma, con 20.086 propiedades forestales y 19.019 propiedades agroforestales, con una media de cinco hectáreas por explotación forestal y once hectáreas por explotación agroforestal².

Por otro lado, el Plan se centra en la reactivación y la reorganización del sector forestal como motor del desarrollo de las comarcas rurales (o más bien, como un motor más, junto con el previsto en la nueva legislación agraria). La propuesta también busca la generación de servicios ambientales, la implantación de nuevas iniciativas de economía verde y la puesta en valor de los productos forestales. Además, plantea la creación de un comité forestal como órgano de coordinación de la política forestal con representación de los sectores, las administraciones y la sociedad civil.

En cuanto a los datos de sostenibilidad económica, el Plan establece una previsión presupuestaria de 185 millones de euros para el período 2014-2020 a partir de la financiación pública (europea, nacional y autonómica) que actualmente se dedica a las

² Datos aportados por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio.

diferentes actuaciones en materia forestal, una cantidad voluntariosa pero alejada de las necesidades de un sector que necesita una incentivación de carácter extraordinario para salir de la crisis en que se encuentra en la actualidad.

3.2. Plan de Acción de Mitigación contra el Cambio Climático en las Islas Baleares (2013-2020)

Es época de planes, que el papel lo aguanta todo y cuesta menos que las inversiones materiales con un determinado nivel de ambición. Dicho esto, explicaremos que las Islas también se han apuntado a la lucha contra el calentamiento global en cumplimiento de los compromisos del Convenio sobre el Cambio Climático y los protocolos de despliegue (especialmente los derivados de los compromisos del Protocolo de Kioto).

En este contexto de crisis económica se ha presentado ahora el Plan de Acción de Mitigación contra el Cambio Climático en las Islas Baleares 2013-2020. El documento fue aprobado por acuerdo unánime de la Comisión Interdepartamental sobre el Cambio Climático. Este órgano, adscrito a la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio, tiene la finalidad de coordinar y asesorar las funciones y actuaciones que, dentro del ámbito de la Comunidad Autónoma, afecten o puedan afectar al cambio climático.

Así, el Plan aprobado establece una serie de medidas cuantificables encaminadas a mitigar de forma tangible el cambio climático en las Islas Baleares (o como mínimo esta es la aspiración). La aplicación de estas medidas tendría que contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero en las Islas Baleares en un 23,6% para 2020 respecto del año de referencia establecido por la Unión Europea, el 2005. Aquel año en la comunidad balear se emitieron 9.982.410 toneladas de CO₂. Esta reducción podría llegar a ser del 30% en el mejor de los casos, lo que supondría dejar de emitir a la atmósfera 2.921.251 toneladas de CO₂ anuales. Según se expone en la presentación del documento, “se trata de un plan realista y aplicable” y que “recoge el compromiso voluntario del Gobierno de las Islas Baleares de asumir un comportamiento responsable y contribuir, junto con el Estado español, en el cumplimiento de los compromisos europeos en materia de cambio climático”. Como finalidad factible el Plan fija la intención de lograr la reducción de un mínimo del 20% de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2020, sin renunciar a intentar superar esta cifra y llegar al 30%.

Analizado el Plan, podemos comprobar que se prevén 58 acciones contra el cambio climático en materia de energía, transporte, vivienda, agricultura, recursos hídricos, gestión forestal y protección del suelo, contaminación atmosférica, gestión de residuos, sanidad forestal, espacios naturales y turismo. El presupuesto estimado para la implantación de este paquete de medidas es de 1.041 millones de euros entre los años 2013 y 2020 (una cuantía que contrasta con la destinada al Plan Forestal). El documento describe, además, la situación actual, con un inventario de emisiones, y analiza la evolución de las tendencias de consumo energético y de emisiones de gases de efecto invernadero, planteando diferentes pronósticos de futuro.

4. Política energética

4.1. Las polémicas prospecciones submarinas

Mientras tanto, como paradoja de la contradicción de las políticas ambientales en nuestro país, la política energética a corto plazo se plantea de manera diametralmente opuesta a la del Plan de Acción de Mitigación contra el Cambio Climático en las Islas Baleares, con la extracción de combustibles fósiles que intervienen en los procesos de calentamiento global. Nos referimos a las prospecciones submarinas de investigación de petróleo y gas.

Así, ante la amenaza de las consecuencias ambientales de las prospecciones, el Gobierno ha reiterado la postura contraria a los proyectos en aguas baleares. Mientras que, en el Congreso de los Diputados, el mismo partido que apoya al Gobierno de las Islas vota a favor de las prospecciones, la presidencia de Baleares apoya a la plataforma “Balears diu No” y manifiesta la postura contraria del Gobierno a las prospecciones petroleras alrededor de las Islas Baleares. Un auténtico monstruo de dos cabezas difícil de justificar.

Con todo, según la hemeroteca, el Gobierno y el movimiento ciudadano “Balears diu No” coinciden en el rechazo frontal y absoluto a los proyectos de sondeos sísmicos en el mar balear y en el hecho de la necesidad de unir esfuerzos ante los organismos competentes para pararlos. Así, podemos leer que el consejero de Medio Ambiente afirmaba que desde el primer momento el presidente del Gobierno balear había sido muy claro en su rechazo a las prospecciones y que la Comisión Balear de Medio Ambiente (CBMA) desde hace un año y medio se ha posicionado rotundamente en

contra, exigiendo el máximo control medioambiental³. Hay que recordar que la CBMA había informado negativamente, tanto en la fase de información previa como en el informe de impacto ambiental, de los proyectos que afectarían al golfo de León y al golfo de Valencia y también, en la fase de información previa, del proyecto que afectaría al Mediterráneo noroccidental.

Por otro lado, el doble juego entre los gobiernos de las Islas y de Madrid ha dado pie a situaciones de aparente confrontación ante la controversia. Así, desde el Gobierno balear se manifestaba que se había trasladado en varias ocasiones la oposición balear a las prospecciones. El malestar en las Islas se habría hecho llegar tanto al ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, que aseguró que se exigirá el máximo rigor en las evaluaciones de impacto ambiental, como al de Industria, José Manuel Soria, y también al comisario europeo de Medio Ambiente. En Europa se le pidió más implicación ante el caso, puesto que los efectos de las prospecciones serían supranacionales, con el añadido de que la problemática se podría acentuar en un mar cerrado como es el Mediterráneo.

El sábado 22 de marzo se celebraron en las cuatro islas sendas manifestaciones en contra de las prospecciones. De momento no hay nada parado.

4.2. Más sobre la incineración de residuos como combustible sólido recuperado

Las hemerotecas también recogen novedades sobre la importación de residuos como combustible sólido recuperado tras algunas previsiones que no han tenido éxito. El objetivo es recaudar unos 6,5 millones de euros extras, por lo que se impulsará la importación con la intención de reducir la tasa que paga la ciudadanía por el tratamiento de los residuos.

En este contexto, el Consell de Mallorca trabaja en la redacción de un nuevo Plan Director Sectorial de Residuos que unifica los dos existentes actualmente: el Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos Urbanos de la Isla de Mallorca y el Plan Director Sectorial para la Gestión de Residuos de Construcción, Demolición,

³ *Diario de Mallorca*: <http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/02/20/bauza-pide-inventen-formulas-parar/912725.html>

Diario Última Hora: <http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2014/118481/company-pide-implique-prospecciones-petroliferas-por-efectos-supranacionales.html>

Diario Balears: <http://dbalears.cat/actualitat/balears/company-assegura-els-efectes-les-prospeccions-mediterrania-seran-supranacionals.html>

Voluminosos y Neumáticos fuera de Uso de la Isla de Mallorca. El nombre del nuevo plan unificado será Plan Director Sectorial para la Gestión de los Residuos no Peligrosos en Mallorca. El marco de aplicación será el de los residuos no peligrosos generados en los domicilios y en las actividades comerciales e industriales de la isla, y define el ámbito material objeto del Plan mediante un listado muy preciso.

El Plan abre la puerta al tratamiento de residuos no procedentes de Mallorca (especialmente que se hayan generado en las otras islas) y a la incineración para generación de energía de combustibles derivados de residuos, en el marco de la Ley 13/2012, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para la activación económica en materia de industria y energía, nuevas tecnologías, residuos, aguas, otras actividades y medidas tributarias, cuyo artículo 19 establece:

Artículo 19

El traslado de combustible derivado de residuos (códigos LER 19.12.10 y 19.12.12) provenientes de fuera de las Illes Balears y dentro del ámbito de la Unión Europea, para su tratamiento en plantas o instalaciones de gestión pública previstas en el Plan director sectorial para la gestión de los residuos urbanos de la isla de Mallorca, sólo se puede hacer con la autorización de la Administración de la comunidad autónoma de las Illes Balears, en conformidad con lo que establecen los artículos 12.4.d) y 25 de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

El tratamiento debe llevarlo a cabo el servicio público insular, con la conformidad previa de su titular.

Los ingresos derivados de este tratamiento deben ser íntegramente aplicados a la financiación del precio general que deben satisfacer los usuarios del servicio público.

Así pues, el Plan Director Sectorial, de manera indirecta, recoge y consolida la previsión de importación del llamado combustible sólido recuperado procedente de residuos con destino a la incineración y cogeneración energética.

5. Otras noticias ambientales

5.1. La restauración forestal de la sierra de Tramuntana

Como se ha reiterado en estas páginas, los incendios forestales suponen un drama paisajístico y ambiental para las Islas, muy preocupadas por la imagen como producto turístico. El solo hecho de vivir un incendio en temporada alta y cerca de zonas turísticas es vivido como un contratiempo que imprime en los visitantes una imagen negativa.

Uno de los mayores incendios en la historia de las Islas fue el de la sierra de Tramuntana del año pasado. El fuego permaneció activo desde el 26 de julio hasta el 13 de agosto de 2013, a pesar de que se consideró bajo control desde el 2 de agosto. El incendio quemó un total de 2.335 hectáreas de los municipios de Andratx, Estellencs y Calvià, y quemó aproximadamente un 2% de la sierra de Tramuntana, por lo que fue considerado el más importante de la historia de las Islas Baleares.

El efecto social del incendio, además del económico y el ambiental, comportó una traducción de este impacto en una manifestación de solidaridad colectiva. La Administración autonómica, consciente de esta reacción popular, reaccionó rápidamente creando la comisión Tot(s) per sa Serra! e instaurando el Plan de Restauración Ambiental de la Sierra de Tramuntana, instrumento elaborado por el Servicio de Gestión Forestal que se estructuró en cinco grandes ejes de actuación: seguridad de personas y bienes, lucha contra la erosión, apoyo a la regeneración forestal y agrícola, recuperación de hábitats y sensibilización sobre el riesgo de incendio forestal.

El Plan se está aplicando mediante tareas profesionales de las brigadas del Institut Balear de la Natura (IBANAT) y diferentes programas de voluntariado, además de tareas realizadas por algunos propietarios de la zona afectada. En la fase actual, los trabajos son financiados en parte por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, que prevé inversiones por un total de 350.000 euros; estos trabajos se centran en la restauración ambiental de unas 150 hectáreas de fincas afectadas, tanto de titularidad pública como privada.

Por una parte, se actúa en una extensión de 75 hectáreas, donde se retira y se elimina la madera quemada con el triturado de troncos y ramaje que se reparte por el mismo terreno con el fin de abonar el suelo. Por otra, se construyen pequeños diques de madera para evitar la erosión del terreno en una superficie de 60 hectáreas, se restablece el arbolado en unas 10 hectáreas y se recuperan unas 5 hectáreas de cultivos en bancales. El Plan también prevé actuaciones que incluyen tareas de rehabilitación de caminos y de lucha contra la propagación de plagas forestales a lo largo del perímetro del incendio.

Igualmente, una de las líneas de prevención consiste en el tratamiento de franjas de seguridad a ambos lados de las carreteras, lugar donde los incendios pueden tener su origen. En esta fase se está actuando en el tramo de la carretera Ma-10 entre Andratx y Estellencs afectado por el incendio forestal. Concretamente, los trabajos consisten en retirar y eliminar todos los árboles quemados y el combustible vegetal en una franja de unos 20 metros a ambos lados de la carretera, en un tramo de 12 kilómetros, comprendidos entre los kilómetros 98 y 110, que representan una superficie total de 40 hectáreas. Los objetivos son evitar incidentes provocados por la posible caída de árboles sobre la calzada y crear un espacio que evite la propagación de las llamas en caso de incendio forestal.

Las actuaciones de lucha y prevención de la erosión del suelo se llevan a cabo mediante acciones de las brigadas forestales del IBANAT y mediante trabajos coordinados con grupos de voluntarios, que han intervenido en una superficie de 15 hectáreas de las 40 previstas. Se trata de intervenir en zonas de fuertes pendientes con el fin de evitar la pérdida de suelo y el consiguiente efecto erosivo.

Se prevé seguir actuando mientras no se agoten los objetivos del Plan.

5.2. La oposición a la política de carreteras del Consell de Menorca

En la isla de Menorca se está proyectando una ampliación de la carretera general de Maó-Mahón a Ciutadella (Me-1) que comportará la construcción de seis enormes rotondas con más de 200 farolas que las iluminarán y los correspondientes accesos y viales de servicios. Las obras se enmarcan en el Convenio de Carreteras entre el Ministerio de Fomento y el Consell Insular de Menorca, que se alargará hasta el año 2017.

En mayo de 2014 se iniciaron las obras del primer tramo (Maó-Mahón a Alaior), obviando la fuerte oposición que ha generado el proyecto. Esta propuesta ha sido considerada como desproporcionada por una significativa parte de la población, que ha manifestado reiteradamente el rechazo a la obra y ha constituido una plataforma ciudadana llamada “Així, no”. Esta oposición ha propiciado el hecho de que la adjudicataria de las obras haya redimensionado la propuesta inicial del Consell de Menorca reduciendo a la mitad las rotondas y realizando mejoras de integración, lo que además implica una reducción del coste en un 8%. El coste de este primer tramo, que

supone una cuarta parte del total, será de 7,5 millones de euros, un coste que la plataforma considera innecesario en una época en la que existen otras prioridades.

El proyecto cuestionado ha movilizó diferentes acciones de protesta como, por ejemplo, caminatas por la carretera o concentraciones y manifestaciones en las principales poblaciones de la isla. La plataforma y el principal grupo ecologista de Menorca (GOB) lamentan el escaso talante dialogante del consejero responsable, quien ha demostrado públicamente posiciones intransigentes y, en algunos escritos en prensa, incluso impropias de un cargo institucional.

5.3. Extracción de lodos contaminados en el puerto de Maó-Mahón

También Menorca es escenario de otra polémica acción con repercusiones ambientales. Y es que la Autoridad Portuaria de Maó-Mahón ha proyectado el dragado del puerto de la ciudad con la extracción y el depósito en tierra de lodos contaminados procedentes de los fondos marinos. La acción ha empezado y los primeros metros cúbicos de lodos contaminados se han depositado sobre el muelle del Cós Nou, a punto para ser trasladados al vertedero de Milà de manera controlada. Cuando se hayan extraído los 29.000 m³ proyectados, se habrá conseguido una descontaminación muy importante del puerto de Maó-Mahón; el problema es el tratamiento de los residuos y los efectos del dragado en las aguas del puerto.

El proyecto de dragado del puerto mahanés ha sido motivo de polémica los últimos años debido a la presencia de metales pesados en el fondo a causa de los vertidos históricos procedentes, fundamentalmente, de la industria de la bisutería a lo largo de las décadas de 1960 y 1970, cuando no existía prácticamente ningún control y las aguas residuales se descargaban directamente en la rada.

La movilización ciudadana ha cursado repetidas denuncias y ha solicitado la intervención de la Fiscalía de Medio Ambiente y la renovación de la cúpula de la Autoridad Portuaria. Finalmente, las conversaciones promovidas desde la iniciativa popular y las organizaciones ecologistas permitieron un acuerdo entre la Administración y el GOB para extraer y depositar en tierra los lodos especialmente contaminados y evitar su depósito en el fondo del mar en la costa sur de Menorca. Este vertido al mar solo será posible para los lodos que cumplan la normativa internacional de referencia, más restrictiva que la española (unas seis veces más exigente que la que se suele aplicar

en los puertos españoles) y con numerosas garantías de seguimiento y seguridad. Así, el vertido previsto al mar se realiza a raíz de los estudios hechos por el Instituto Oceanográfico, que analizó toda la zona marina entre la Mola y la isla de l'Aire. Así pues, los lodos se vierten a más de una milla de la costa en un área señalizada por una boya permanente dotada de un aparato que mide las corrientes submarinas y envía señal de parar el dragado si hay riesgo de desplazamiento de los materiales hacia otras zonas no protegidas.

Las previsiones son que se extraerán unos 8.000 m³ que no son necesarios para ganar profundidad, pero, dado que presentan importantes concentraciones de mercurio, se retirarán como operación de descontaminación con el fin de que una parte del vigor natural que perdió el puerto debido a los vertidos industriales de las décadas de 1960 y 1970 pueda ser restaurado.

Por otro lado, y en cuanto al vertido en tierra, se ha habilitado un cercado sobre el Cós Nou para que los lodos se puedan secar sin perder el control de los limos. La última ampliación del vertedero de Milà ofrece muchas garantías ambientales para recibir este material. Dado que Milà está rodeado de terrenos calificados como red Natura 2000, la ampliación se hizo bajo importantes exigencias europeas, de forma que es un área totalmente impermeabilizada y dotada de una depuradora química que impide cualquier salida de contaminantes.

El material dragado, una vez secado, podrá sustituir las camionadas de tierras e inertes que se tienen que llevar al vertedero de manera permanente para estabilizar los residuos urbanos no reciclables que se depositan. Por lo tanto, no ocupará el espacio destinado a residuos.

El acuerdo incluye la autorización al GOB para que siga de manera permanente la operación con la utilización de cámaras y sistemas informáticos que registran la actividad diariamente.

5.4. Políticas de conservación en el Parque Natural de ses Salines de Ibiza y Formentera: las líneas eléctricas

La presencia de líneas eléctricas en zonas frecuentadas por aves puede ser la causa de numerosos casos de electrocución. Se han realizado muchos estudios destinados a

evaluar el diseño y la ubicación de los tendidos eléctricos para minimizar la muerte de pájaros.

En el caso de Ibiza, uno de los lugares más vulnerables es el Parque Natural de ses Salines, unas zonas húmedas de gran valor ecológico, santuario de muchas especies de aves, declaradas zona de especial protección para las aves (ZEPA). Una de las ubicaciones donde la incidencia de electrocución es mayor es la zona conocida como la Sal Rosa.

A pesar del trabajo de años de estudio y seguimiento, que ha propiciado una reducción sensible de las electrocuciones, quedan puntos negros que hay que resolver. Efectivamente, existe un pequeño conjunto de líneas eléctricas que causan un gran impacto y la mortalidad de especies tan relevantes como el flamenco o la cerceta pardilla (*Marmaronetta angustirostris*). Esta problemática, concentrada esencialmente en los tendidos eléctricos que atraviesan los estanques de Sal Rosa, ha sido reiteradamente denunciada, sin que se divise ningún tipo de solución a corto plazo. Por otro lado, esta inacción implica el incumplimiento de las previsiones del Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), aprobado mediante el Decreto 132/2005, que obliga a enterrar los mencionados tendidos antes de diciembre de 2008 o diciembre de 2010, en función de su tensión. Como se denuncia por parte de la organización ecologista GEN-GOB, la anómala situación de incumplimiento se mantiene en la actualidad.

Los estudios realizados han podido constatar la muerte de un número significativo de ejemplares de diferentes especies en este punto, sobre todo por colisión. Las aves afectadas incluyen ejemplares de flamenco, archibebe común, lechuzón de pajonal o nuco y diferentes anátidos, incluso, de cerceta pardilla, una especie catalogada y en peligro de extinción que forma parte, junto con otras especies, del Plan Homeyer⁴ con el cual la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio desarrolla los correspondientes planes de conservación.

Las denuncias hechas públicas propiciaron el hecho de que en unos tres kilómetros de línea se instalaran los llamados “salvapájaros” de tipo espiral, unos sistemas para reducir la posibilidad de colisión. El problema es que la intervención no fue realizada en

⁴ Resolución del consejero de Medio Ambiente de 26 de noviembre de 2008 por la cual se aprueban los planes de recuperación de *Vicia bifoliolata*, de las aves acuáticas catalogadas en peligro de extinción de las Illes Balears (Plan Homeyer), el plan de conservación de la flora vascular del Puig Major y los planes de manejo del tejo *Taxus baccata* y del buitre negro *Aegypius monachus*. BOIB, núm. 171, de 06/12/2008.

el tramo realmente conflictivo. Efectivamente, los dispositivos se instalaron en tramos anteriores y posteriores a los estanques de Sal Rosa, dejando un tramo sin actuación de unos 200 metros. Según la entidad ecologista, se trata de los 200 metros donde se concentra el 100% de la mortalidad en esta línea. Desgraciadamente, la deficiente actuación ya tiene resultados claros, y en el poco tiempo que ha transcurrido de 2014 se contabilizan bajas de especies de interés. El último ejemplar reportado es un flamenco anillado que murió por colisión con los tendidos de Sal Rosa y fue localizado el pasado 2 de febrero.

5.5. Llamada de atención por la política de prevención de incendios forestales

Como comentario de última hora, hay que advertir que los primeros incendios forestales han llegado, lo cual, especialmente en Ibiza, ha disparado las alarmas ante una situación de sequía preocupante.

El problema es la desinversión en tareas de prevención, que se sustituye por una especial atención a los dispositivos de extinción. Algunos documentos de la planificación forestal en las Islas dejan patente la premisa de que “los incendios forestales se apagan en invierno”, en referencia a las actuaciones de prevención, limpieza y descarga de material pirófito en las zonas más habituales de origen del fuego.

La política de reducción del déficit público, a pesar de que se diga lo contrario, ha conllevado que, si bien se ha mantenido el gasto en el dispositivo de extinción, hayan disminuido las actuaciones de prevención, cuando lo más recomendable, a la vista de las campañas pasadas, habría sido incrementar el gasto y las actuaciones en materia de prevención. Los esfuerzos se han concentrado en buena parte en la restauración de la sierra de Tramuntana (Mallorca), afectada por el incendio de julio de 2013, y se han dejado de lado intervenciones en otros lugares.

Igualmente, con uno de los incendios de Ibiza comenzó la polémica en relación con la distribución de los medios de extinción, concentrados principalmente en la isla de Mallorca y con un carácter de movilidad interinsular que los hace, a priori, más polivalentes.

Sumari: 1. Introducció. 2. Activitat legislativa. 2.1. La Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl. 2.2. Avantprojecte de la llei de transports i mobilitat. 2.3. Avantprojecte de llei agrària. 3. Política sobre patrimoni ambiental i canvi climàtic. 3.1. El Pla Forestal de les Illes Balears. 3.2. Pla d'Acció de Mitigació contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears (2013-2020). 4. Política energètica. 4.1. Les polèmiques prospeccions submarines. 4.2. Més aspectes sobre la incineració de residus com a combustible sòlid recuperat. 5. Altres notícies ambientals: 5.1. La restauració forestal de la serra de Tramuntana. 5.2. L'oposició a la política de carreteres al Consell de Menorca. 5.3. Extracció de fangs contaminats al port de Maó. 5.4. Polítiques de conservació al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera: les línies elèctriques. 5.5. Crida d'atenció per la política de prevenció d'incendis forestals.

1. Introducció

Hom té la sensació que la crisi econòmica serveix de pretext per devaluar les polítiques ambientals i, per extensió, l'ordenament jurídic sobre la matèria. Per posar un exemple concret, podem constatar que, a Espanya, la lluita contra el canvi climàtic s'enfoca amb la penalització a la producció d'energies renovables: això és un contrasentit i està fora de tota lògica. En paral·lel, assistim a la controvèrsia que han despertat les prospeccions a la recerca de petroli i gas als subsòls marins del nostre entorn mediterrani, iniciativa que ha aixecat una tempesta ciutadana amb una resposta política ambigua que deixa entreveure que les contradiccions dels governants s'originen sovint en les pressions i els interessos d'empreses i grups d'influència diversa. Penalitzar les energies renovables i posar en perill els fons marins i el litoral a la recerca de minses reserves de combustibles fòssils que en bona part són l'origen de l'escalfament global que patim, és una paradoxa ambiental difícil de justificar. Per aquest motiu reservem un apartat específic a introduir el conflicte que s'ha generat en "destapar-se" el reguitzell d'autoritzacions de prospeccions sísmiques submarines en la Mediterrània. L'oposició a les illes Balears contra aquesta tècnica és molt transversal i ha trobat ressò en segments socials de votants tant de dreta com d'esquerra, la qual cosa preocupa especialment el partit que governa a la Comunitat Autònoma i a les illes de Mallorca, Menorca i Eivissa, i també a l'Estat.

D'altra banda, els objectius de lluita contra la crisi, reactivació de l'economia i simplificació de la burocràcia, s'han traduït en la relaxació de les mesures normatives preventives, en especial l'avaluació ambiental (tant l'estratègica com la de projectes) i les tècniques d'autorització. A les Illes, a més dels efectes de les modificacions introduïdes a la legislació de control preventiu ambiental, han proliferat les normes que incorporen més i més excepcions a aquests controls. Des de la legislació sectorial s'està trencant l'estructura del sistema de prevenció, desplaçant i marginant el paper de la planificació (ordenació territorial, urbanística i ambiental), dels mecanismes

d'autorització (amb l'abús de les declaracions responsables), i dels instruments de control ambiental previ (avaluació ambiental estratègica i avaluació d'impacte ambiental). En aquest sentit, la normativa turística, agrària, de comerç, entre d'altres, ha encetat un camí de prioritats que introdueix un gran nombre de dispenses i excepcions a les regles generals urbanístiques i d'ordenació territorial que, sense convertir en subsidiaris aquests dos subsistemes, trenquen una tradició normativa de més de mig segle d'existència.

Així, doncs, com a corol·lari a tot això, hem de destacar el retrocés en la protecció territorial, patrimonial i del paisatge, que s'està generant a les illes Balears arran d'un conjunt de lleis sectorials que perden de vista l'interès general i els mandats constitucionals. L'estructura del sistema normatiu se'n veu fortament compromesa amb visions molt parcials que perden de vista el concepte de conjunt i incorporen règims excepcionals que enerven les regles generals: al final les excepcions són la regla amb clara vulneració de principis elementals com el d'igualtat, legalitat, correcció de les perturbacions dels règims jurídics (promovent les legalitzacions i el premi a les infraccions i alteracions de les normes), entre d'altres. Les noves lleis que ordenen el sector turístic o l'urbanisme, o que ordenaran el sector agrari o miner, són un exemple de pèrdua de vista de la concepció sistèmica del dret positiu i de legislar contra l'interès general i en favor dels interessos sectorials o particulars. També haurem d'aprofundir en això.

Amb tot, la política forestal es desperta amb llums i ombres després d'uns quants anys d'inèrcies derivades del desinterès. D'una banda, valorarem els aspectes positius de disposar d'un nou pla forestal a les Illes, i d'altra banda, haurem d'avaluar la contradicció que suposa abandonar les accions preventives amb relació als incendis forestals sobre la vella màxima que els incendis "s'apaguen" a l'hivern amb tasques intenses de protecció i de prevenció. Igualment, l'increment d'hectàrees cremades el 2013 qüestiona aquesta política, com també la relativa a la distribució dels recursos d'extinció dels incendis forestals.

D'altra banda, les notícies de caràcter ambiental s'han reduït al llarg d'aquest darrer semestre: llevat de qüestions marginals i de caràcter menor no podem destacar gran cosa pel que fa a polítiques ambientals. Amb tot, podem extreure una sèrie de notícies d'interès que estableixen el contrapunt a l'obsessió actual de posar el potencial ambiental al servei de la indústria turística. Com a mostra podem destacar com es

potencia l'ús turístic i de visita del Parc Nacional de l'Arxipèlag de Cabrera amb l'obertura d'un refugi per a visitants aprofitant part de les antigues instal·lacions militars. Malgrat aquest reconeixement dels valors ambientals com a element d'atracció turística, el debat de l'Ecotaxa continua essent una causa perduda; això ho hem pogut comprovar en un debat recent al Parlament de les Illes en les sessions que han tingut lloc la primera setmana de maig.

Finalment, destacarem una sèrie de notícies amb diferent repercussió ambiental pel que fa a residus, energia, contaminació marina, alteració del litoral, mobilitat, o política de conservació en els espais naturals, que també plantegen visions controvertides i no exemptes de polèmica.

Aquests i altres temes els podrem analitzar amb més amplitud a continuació.

2. Activitat legislativa

2.1. La Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl

Les Balears han assolit a la fi una fita històrica: aprovar una llei del sòl pròpia que pretén sistematitzar la regulació de l'urbanisme des d'una perspectiva clàssica, tot i que, quan s'analitza en profunditat, es pot comprovar que no resol tot el conjunt del règim d'ordenació del sòl. No obstant això, i malgrat que probablement caldrà introduir modificacions en un futur pròxim, podem considerar que s'ha fet un pas molt important que, si més no, estableix les noves bases legislatives del futur urbanístic de les Illes.

Arran de la Sentència 61/1997 del Tribunal Constitucional, la legislació aplicable a les Illes va retrocedir novament al règim del Text refós de 1976 complementat amb algunes lleis autonòmiques específiques. Calia, doncs, dotar l'arxipèlag d'un règim propi adaptat als nous temps. Així, des de la legislatura 1999-2003 s'han succeït diferents propostes de llei del sòl a les Balears, la primera proposta (la Llei reguladora de l'ordenació urbanística a les illes Balears) es va truncar, precisament, amb la finalització d'aquell període i no va tenir continuïtat. El 2006 es va iniciar la tramitació de l'Avantprojecte de llei del règim del sòl i de l'habitatge de les illes Balears, una proposta que tampoc no va concloure al Parlament. Amb posterioritat, a la legislatura 2007-2011, es va reprendre un projecte de llei ambiciós que pretenia ordenar el subsistema de l'ordenació territorial amb el subsistema urbanístic, amb la conformació la Llei d'ordenació del territori i de regulació de l'activitat urbanística de les illes

Balears que, amb prop de 300 articles, compilava el règim integral. En paral·lel s'havia elaborat un text alternatiu que procedia de treballs realitzats la legislatura anterior i que tampoc no va ser tramitat. Finalment, amb el canvi de Govern (2011-2015), es va treballar en una línia menys ambiciosa (que va anar prenent complexitat amb els successius esborranys) sobre la base d'un articulat d'uns 195 articles amb el nom de Llei reguladora de l'ordenació i ús del sòl. Després de més d'un any de treball i tramitació, a la fi el text es va aprovar al mes de març amb el nom de Llei d'ordenació i ús del sòl —Llei 2/2014, de 25 de març, d'ordenació i ús del sòl (LOUS)—, text que entrarà en vigor el 30 de maig de 2014⁵.

L'objecte de la llei és establir el règim jurídic general de la intervenció administrativa en l'àmbit urbanístic des d'una perspectiva clàssica, potser poc innovadora i mancada de propostes imaginatives. Igualment, es pretén definir el règim urbanístic de la propietat del sòl, d'acord amb la funció social que hi té atribuïda, i en desplegament del règim estatal previst en el RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la llei del sòl.

Efectivament, la Llei 2/2014, segueix un esquema correcte però clàssic, inspirat en la regulació de la dècada dels setanta del segle XX. Els eixos essencials que estructuraven el règim urbanístic del sòl (desplegant així la legislació bàsica) el conformen la regulació del planejament, la gestió i la disciplina, amb la introducció d'apartats específics sobre intervenció en el mercat del sòl, sobre l'exercici de les facultats relatives a l'ús i l'edificació del sòl, i també sobre el règim de les expropiacions urbanístiques (que al seu torn són aspectes que s'ubicaven en el subsistema de la gestió urbanística). Igualment hem de destacar la inclusió de nombroses disposicions addicionals, transitòries i finals, que sumen la quantitat de 35 normes més, algunes de les quals amb enorme transcendència i complexitat, com la que amaga una amnistia encoberta en sòl rústic. Alguns experts ja s'han manifestat en el sentit que estem davant una llei poc innovadora i amb mesures injustes, com ara l'anomenada "taxa del perdó" o amnistia encoberta, a fi de legalitzar edificacions irregulars; hi ha qui considera que ens trobaríem davant un greuge normatiu que premia l'infractor i deixa en situació de perplexitat les persones que han respectat la legalitat.

D'una primera valoració succinta, podríem dir que la llei ha perdut l'oportunitat d'integrar millor els dos grans sistemes de l'activitat administrativa al territori, com

⁵ BOIB número 043 de 29 de març de 2014.

són l'ordenació territorial i l'urbanisme. D'altra banda, tampoc ha sabut integrar un dels elements essencials de l'urbanisme: donar compliment al mandat de l'article 47 de la Constitució espanyola amb relació al dret a l'habitatge digne. Si atenem el fet que un dels objectius essencials de l'urbanisme és satisfer la necessitat d'habitatge a la població, observem la mancança d'una regulació més agosarada en aquest sentit. De fet, en esborranys redactats per anteriors governs, aquestes qüestions (la integració de l'ordenació territorial, l'urbanisme i l'habitatge) havien conformat els objectius centrals de la norma. L'experiència de les dècades de 1950 i 1960, demostraren la necessitat d'unificar les polítiques d'urbanisme amb les d'habitatge, i ambdues calia ordenar-les sobre l'esquema bàsic de la correcció de les tensions sobre el territori (funció destinada a l'ordenació territorial).

D'altra banda, el precedent de determinades previsions de la Llei 7/2012, de 13 de juny, de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible, que varen ser qüestionades per la Comissió Bilateral de Cooperació entre l'Administració General de l'Estat i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, ha condicionat el redactat final de la Llei 2/2014. Això no obstant, s'han mantingut algunes previsions que podrien ser de dubtosa constitucionalitat; hem d'estar atents en un futur per comprovar si finalment s'interposa cap recurs davant el Tribunal Constitucional o si de l'aplicació dels aspectes més controvertits sorgeix alguna qüestió d'inconstitucionalitat.

Les previsions que més atenció estan acaparant en els primers dies des de la publicació de la llei són la disposició addicional vuitena i la disposició transitòria desena.

Al llarg del tràmit de la llei també havia plantejat controvèrsia la redacció de l'article 26 amb relació a la disposició addicional sisena, atès que aquestes previsions no semblava que encaixessin gaire amb el que disposava l'article 13 del RDL 2/2008, de 20 de juny, pel qual s'aprovà el Text refós de la llei del sòl. La possible contradicció normativa va ser resolta per l'apartat 3r de la disposició derogatòria única de la Llei 8/2013, de 26 de juny, de rehabilitació, regeneració i renovació urbanes, que va suprimir l'article esmentat, especialment rellevant aquí pel que fa a la definició d'assentament tradicional en el medi rural. L'article 26 de la Llei 2/2014 possibilita la consideració com a urbà dels assentaments existents abans de l'entrada en vigor de la Llei 7/2012, de 13 de juny de mesures urgents per a l'ordenació urbanística sostenible, amb independència que siguin o no tradicionals.

La disposició addicional vuitena estableix, dins del marge de la previsió concreta recollida en l'article 26 pel que fa als assentaments en el medi rural, un règim excepcional per possibilitar que el planejament urbanístic general pugui preveure àmbits de sòl urbà on no resulti exigible l'existència de xarxa de sanejament, sempre que es compleixin requisits, com ara: que l'execució de la xarxa de sanejament suposi, per les característiques geomorfològiques de la zona o per la baixa intensitat del nucli, un cost manifestament elevat; o que la seva implantació no suposi cap avantatge per al medi ambient. Disposició inspirada en una interpretació de la normativa europea sobre la matèria. La disposició preveu que, en aquests casos, el planejament haurà de determinar la instal·lació de sistemes de tractament d'aigües residuals com: depuradores d'aigua, o fosses sèptiques estanques i homologades. El perill d'aquesta previsió és que es pugui convertir en la regla general, especialment en l'illa més problemàtica, que seria el cas d'Eivissa, o en nuclis de la serra de Tramuntana a Mallorca.

Pel que fa a la disposició transitòria desena, podríem començar dient que ens trobem davant d'una previsió normativa que exigiria un monogràfic sencer. Es tracta d'una proposta plena d'incerteses i que ningú no sap exactament com es resoldrà a la pràctica; el que ja podem avançar és que pot comportar greuges comparatius entre les diferents illes. La norma estableix un procediment extraordinari d'incorporació a l'ordenació d'edificacions existents en sòl rústic: és l'anomenada amnistia urbanística o "taxa del perdó".

La disposició estableix que "les edificacions existents en sòl rústic respecte de les quals a l'entrada en vigor d'aquesta llei ja no procedís adoptar les mesures de restabliment de la legalitat urbanística, per manifesta prescripció de la infracció segons la normativa d'aplicació, es podran incorporar a l'ordenació en el termini màxim de tres anys, amb tots els drets i deures inherents a les obres realitzades amb llicència".

El caràcter d'imprescriptible de les infraccions en sòl d'especial protecció, es resol de la manera següent: "Per a l'aplicació de l'anterior en sòls inclosos dins l'àmbit de la Llei 1/1991, de 30 de gener, d'espais naturals i de règim urbanístic de les àrees d'especial protecció de les Illes Balears, s'entendrà que ha prescrit la infracció si s'acredita l'existència de l'edificació amb anterioritat a dia 10 de març de 1991, sempre que no s'hi hagi efectuat amb posterioritat un canvi d'ús".

El problema d'aplicació de la DT desena, està en el mecanisme que s'ha ideat en diferents fases. La normativa de la llei requereix una derivació reglamentària i un

procediment administratiu que no està gaire clar com es resoldrà. La norma ideada pel legislador diu: "A aquests efectes, el procediment se substanciarà per la persona interessada davant l'ajuntament corresponent, on se sol·licitarà la legalització juntament amb la documentació gràfica i escrita relativa a l'edificació en el seu estat real i projecte d'incorporació de mesures d'adequació a les condicions generals d'integració ambiental i paisatgística que l'ordenació, en el seu cas i als efectes d'aquesta incorporació, estableixi, sense que els siguin d'aplicació els paràmetres i les condicions urbanístiques aplicables amb caràcter general a les edificacions en sòl rústic". En aquest sentit no resta clar si caldrà un projecte complet de legalització subscrit per un facultatiu arquitecte i degudament visat o, per contra, n'hi haurà prou amb la memòria i simples croquis (els responsables de la Conselleria d'on ha emanat el projecte de llei no saben respondre i ho deriven tot al desplegament reglamentari o al que decideixin els ajuntaments).

Així, en aquest sentit, la disposició que comentem estableix que "entrarà en vigor una vegada que, en l'àmbit insular respectiu, s'hagi adoptat acord plenari del consell insular per majoria absoluta. Aquest acord plenari es publicarà en el *Butlletí Oficial de les Illes Balears* i el termini de tres anys al qual es refereix l'apartat 1 de la present disposició començarà a comptar a partir de la dita publicació". Cal presumir que el legislador està parlant d'un desplegament reglamentari més que d'un acte administratiu, atès que seria un cas insòlit sotmetre una llei a una entrada en vigor en diferit i a expenses d'un simple acord plenari que podria no dur-se a terme mai.

Pel que fa a la prescripció de les infraccions, requisit sine qua non perquè pugui operar la "taxa del perdó", cal tenir present el còmput establert "als únics efectes d'aplicar el procediment previst a aquesta disposició, quan l'edificació que es pretén legalitzar tingui un ús prohibit", l'inici del còmput del termini de prescripció pel que fa a la infracció per a aquest ús s'entendrà iniciat en el moment en què s'acrediti la seva implantació. Aquesta mateixa regla s'aplicarà als casos d'edificacions que hagin estat objecte de canvi d'ús amb posterioritat a la seva construcció.

D'altra banda, les limitacions per a l'amnistia urbanística continuen amb les previsions següents: d'una banda, se'ns diu que "l'anterior incorporació no resultarà d'aplicació a les edificacions que, d'acord amb el planejament vigent, quedin subjectes a expropiació, cessió obligatòria i gratuïta o enderrocament o quan en les edificacions es desenvolupin activitats subjectes a la prèvia declaració d'interès general"; d'altra banda, s'estableix

que “no resultarà d’aplicació a aquelles edificacions existents situades en domini públic i en les servituds derivades de la legislació de costes”; finalment, cal tenir present que “la legalització restarà subjecta al pagament de les mateixes taxes i dels mateixos impostos previstos a la normativa per a les noves edificacions. Així mateix, la persona interessada haurà d’abonar a l’ajuntament una prestació econòmica. Les quantitats ingressades per aquest concepte s’han de destinar a l’adquisició, la recuperació, la protecció i la gestió sostenible d’espais i recursos naturals o la seva incorporació al patrimoni municipal de sòl”.

Pel que fa a la configuració de la “taxa del perdó”, s’estableix que la prestació econòmica s’ha d’establir per l’aplicació d’una sèrie de percentatges amb relació al cost d’execució material de l’edificació legalitzada, de conformitat amb el que s’estableixi a l’expedient de legalització. Així, la disposició preveu els pagaments següents: el 15%, si la legalització es realitza el primer any de la vigència d’aquest procediment; el 20%, si es realitza el segon any, i el 25%, si es realitza el tercer any.

No deixa de ser curiós que aquesta disposició és la que més expectació ha causat de la llei, i la que més línies d’articles d’opinió ha generat, fins i tot abans d’entrar en vigor.

2.2. Avantprojecte de la llei de transports i mobilitat

Tenim l’embrió d’una altra norma de rang legal que marca una nova tendència, i és que el Govern ha donat llum verda a l’Avantprojecte de llei de transports terrestres i mobilitat. Es proposa amb aquest text la regulació autonòmica pel que fa a transport, urbà i interurbà, adequada a les particularitats territorials de les Illes. Els redactors de la proposta afirmen que el text aprovat és fruit del consens sorgit en dos anys de treball conjunt entre la Direcció General de Transports, les diferents administracions implicades i tots els representants del sector del transport a les illes Balears i també de les organitzacions d’usuaris i consumidors.

L’esborrany s’ha elaborat amb una doble intenció: d’una banda, regular determinats aspectes de les activitats de transport terrestre que fins ara es regien per la normativa estatal per adequar-la a les necessitats de la nostra comunitat autònoma i a la normativa europea vigent. Igualment es persegueix, d’una banda, regular el transport urbà de viatgers d’acord amb el contingut de la Sentència del Tribunal Constitucional de 27 de juny de 1996 i, d’altra banda, aprovar la normativa que ajudi a racionalitzar i millorar la

mobilitat de les persones mitjançant la planificació de les infraestructures de transports en l'àmbit territorial de la nostra comunitat, en l'àmbit de cada illa, com també dels municipis que el pla de mobilitat mateix estableixi.

Aquesta proposta es va començar a confeccionar a finals de 2011 i ha superat tres períodes d'exposició pública, en els quals s'han presentat una setantena d'al·legacions. El text formulat es compon de 4 títols i 13 capítols, 195 articles, 9 disposicions addicionals, 5 de transitòries, 1 de derogatòria i 8 disposicions finals, tot i que caldrà esperar el text definitiu que surti del Parlament.

De l'anàlisi de la proposta exposada públicament, podem destacar algunes novetats que responen a demandes històriques, com ara que es determini a set el nombre màxim de places per als taxis, en comptes de les cinc actuals. El sector turístic, els usuaris locals i els mateixos transportistes havien reclamat la mesura en reiterades ocasions; amb la nova regulació s'obriria la possibilitat que els ajuntaments atorguessin llicències temporals de taxi.

Els redactors han volgut destacar el fet de viure a una comunitat eminentment turística, i per això proposen actualitzar la normativa de transport discrecional per adaptar-la als mitjans telemàtics que actualment s'imposen en el mercat de la contractació del transport de viatgers. A més, pel que fa al transport turístic i discrecional, la llei introdueix la possibilitat de contractar el servei per plaça de forma anticipada per als trajectes amb origen o destinació als ports o aeroports de les Balears.

Amb relació al transport regular de viatgers, la normativa s'adequa al reglament europeu, d'obligat compliment, i també simplifica els tràmits administratius per facilitar les extensions de línies existents. A més, s'actualitza la normativa relativa a trens turístics i es regulen per primera vegada els vehicles motoritzats de menys de quatre rodes homologats per transportar viatgers. Cal destacar també que la nova llei garanteix serveis bàsics per a Formentera, com les connexions amb l'aeroport d'Eivissa o amb els serveis hospitalaris de referència.

En l'àmbit ferroviari, algunes de les novetats que presenta la llei són la reducció de vuit a cinc metres de la zona de domini públic d'ambdós costats de la plataforma ferroviària en zones urbanes consolidades, per reduir les expropiacions en cas d'actuacions, i la definició, per primera vegada, dels drets i les obligacions dels usuaris i de l'operador del servei. Així mateix, com no podia ser d'una altra manera, es regula el transport

ferroviari adequant-lo a les dimensions territorials insulars, com també el transport tramviari, que fins ara no s'havia regulat.

Pel que fa a la inserció del sector del transport en l'ordenació territorial i urbanisme, cal destacar que la llei ha de servir per establir els objectius del Pla Director Sectorial de Transport de les Illes Balears i per regular de forma sostenible i racional l'ordenació de la mobilitat terrestre de les Illes. En aquest sentit, la llei ha d'exigir un estudi de viabilitat econòmica i social a les futures infraestructures vinculades al transport terrestre que suposin una inversió de més de deu milions d'euros; aquesta previsió podria tenir en un futur una gran transcendència ambiental.

2.3. Avantprojecte de llei agrària

Recentment s'ha presentat al Consell Agrari Interinsular el primer esborrany de la futura llei agrària de les illes Balears. A diferència d'altres comunitats autònomes, les illes Balears no havien abordat fins ara la promulgació d'una llei que, amb un enfocament global, regulés l'agricultura i el desenvolupament rural, un sector que pateix de primera mà els inconvenients de la insularitat, que s'evidencien amb l'escassa rendibilitat de les explotacions agràries i el consegüent abandonament progressiu d'aquestes explotacions i, en general, del medi rural. Aquesta situació marcarà un canvi de tendència normativa amb la finalitat de reconvertir el sector agrari en un instrument econòmic polièdric i multifuncional. La Conselleria manifesta que aquestes illes necessiten continuar mantenint el territori i que els agricultors puguin continuar vivint dignament de l'activitat que exerceixen, i això és precisament el que sembla que pretén aquest avantprojecte.

Així, alguns dels principals objectius del text proposat són fer front als problemes de baixa rendibilitat de l'agricultura balear, i les solucions que pretén incorporar van en la direcció de fomentar la inversió i l'ocupació en el sector primari (tot i que ho fa amb la terciarització del camp). Les receptes es dissenyen amb el propòsit d'afegir valor al patrimoni rural, i facilitar la gestió activa del territori i del medi ambient amb el manteniment de l'activitat agrària. Un dels objectius de la proposta és proporcionar eines al sector perquè pugui perdurar en el temps, amb la responsabilitat afegida de conservadors del paisatge. Cal tenir present que a les Balears i Pitiüses, el paisatge té una importància significativa com a reclam turístic i de qualitat ambiental, per això no

es pot obviar el fet que la pagesia sigui la responsable de la preservació del 70% del territori insular.

Les receptes a les quals fèiem esment suposen el reforç del sector primari amb polítiques complementàries més pròpies dels sectors secundari o terciari (serveis). D'aquesta forma, la futura llei es proposa regular noves activitats complementàries de diversificació de l'activitat agrària com ara les *agroestades*, els *agrorerefugis*, l'*agrocultura*, l'*agroenergia*. Igualment ha de facilitar la implantació d'instal·lacions i activitats relacionades amb el món dels equins (circuitos, hípiques, hipòdroms, camps de polo, etcètera). En la mateixa línia, el text regula i propicia la venda directa de productes agroalimentaris per facilitar la posada al mercat de productes sense intermediaris, cosa que ha de millorar el preu tant per al productor com per al consumidor.

D'altra banda, la proposta exposada també regula la possibilitat de crear la figura de les reserves i vedats de recursos silvestres com a instrument de manteniment i gestió activa de les explotacions forestals. Amb tot, no resta gaire clar quines seran les conseqüències i els compromisos que es desprendran amb relació a la implantació d'aquestes activitats. La intenció, sembla, és que s'exigeixi el compromís de permanència en el sector per donar continuïtat a la conservació del territori, i només es permetria en activitats agràries preferents.

També podem comprovar que el nou règim de diversificació dóna facilitats per a l'impuls i el desenvolupament de l'activitat agrària i complementària. Aquestes activitats quedaran reconegudes com a ús admès en el medi rural i no estaran sotmeses a la prèvia declaració d'interès general que permet la legislació urbanística per al sòl rústec; d'aquesta forma les activitats regulades en la llei agrària entren en un règim general d'exoneració de compliment de determinades condicions i limitacions que imposava la normativa reguladora del sòl. D'aquest règim d'excepció se'n beneficiaran les agroindústries que demostrin una producció activa i sempre que disposin de l'autorització pertinent de la conselleria competent pel que fa a agricultura, eliminant el control que exercien els consells insulars mitjançant les declaracions d'interès general derivades de la Llei 6/1997, de 8 de juliol, del sòl rústic de les illes Balears. La llei també possibilita el canvi d'ús d'edificacions existents per a la instal·lació d'indústries de transformació agrària per al procés de la producció pròpia, o per fer activitats

complementàries de diversificació agrària, seguint el model d'altres països, com ara França.

Amb relació al fet insular, la proposta vol exigir-ne a l'Estat i a la Unió Europea el reconeixement i la necessitat de recompensar els inconvenients que això planteja al sector. En aquesta mateixa línia, el text introdueix la regulació per llei de l'obligació del Govern de consignar pressupostàriament les dotacions econòmiques necessàries per garantir el cofinançament de les diferents línies d'ajuda del sector; amb tot, aquesta previsió té caràcter programàtic i està supeditada a la disponibilitat pressupostària (com podem comprovar que passa en altra legislació sectorial).

Com a complement de totes les qüestions anteriors, podem constatar la previsió de normes adreçades al foment de la incorporació dels joves i les dones al sector, la qual cosa és una bona iniciativa. També la proposta formula altres iniciatives, com ara: impulsar la producció local i les marques de qualitat; regular el règim de declaració de zones catastròfiques; crear l'Estratègia balear de millora del coneixement agrari amb l'objectiu de millorar el coneixement agrari i agroalimentari de les illes Balears; o implantar la regulació, per primera vegada, de la producció, l'emmagatzematge i la gestió dels fems.

L'esborrany fet públic de l'avantprojecte conté 11 títols i un total de 172 articles, a més de 4 disposicions transitòries, 6 de finals, 1 de derogatòria i 1 annex.

3. Política sobre patrimoni ambiental i canvi climàtic

3.1. El Pla Forestal de les Illes Balears

Com hem comentat abans, a propòsit de la proposta de llei agrària, el paisatge de les illes Balears és considerat d'importància estratègica com a reclam turístic. Això implica que, a més de l'objectiu d'assolir una bona qualitat de la geografia agrícola, cal fomentar també l'ordenació i la gestió de les masses forestals amb la finalitat de garantir la conservació integral del paisatge natural.

L'ordenació dels boscos deriva d'una tradició normativa i tècnica, que ha desplegat diferents alternatives en funció dels objectius temporals i les finalitats productives o de conservació. La Llei 43/2003, de 21 de novembre, de forests, preveu una cascada d'instruments d'ordenació forestal que situa en la cúspide l'anomenada Estratègia

forestal espanyola, que cal completar amb el Pla Forestal Espanyol, els plans d'ordenació dels recursos forestals (PORF) de les comunitats autònomes, i les directrius bàsiques comunes per a l'ordenació i aprofitament dels boscos que es despleguen per les instruccions autonòmiques.

Dins d'aquest marc normatiu, el Govern de les Illes Balears ha decidit recuperar la figura del Pla Forestal en substitució de les estratègies forestals que s'havien elaborat en altres èpoques. El Pla Forestal de les Illes Balears es presenta com un document que ha de servir de referència per a la política forestal de la nostra comunitat autònoma dels anys vinents, però no resta clar si s'adopta amb la naturalesa d'un PORF, ni quin mecanisme d'aprovació ni amb quin rang normatiu s'aprova.

Els redactors afirmen que “les Illes Balears era l'única comunitat autònoma sense un pla forestal”, i emfasitzen la necessitat d'una “conservació i gestió actives” dels boscos “enfront d'una consciència proteccionista que moltes vegades porta a l'abandonament”.

Analitzant la gènesi i l'elaboració del Pla, podem comprovar que el document presentat és fruit d'un procés de participació social. Les dades consultades palesen que des de novembre de 2012, més de 375 institucions i ciutadans han participat en 10 sessions col·lectives de treball i 24 reunions amb especialistes ambientals i gestors forestals. El Pla Forestal estableix una estratègia per afrontar de manera participada i consensuada els reptes que presenta la futura gestió dels boscos i les superfícies forestals de les illes Balears, preveu una vigència de 21 anys, per assolir els 3 pròxims períodes financers de la Unió Europea (2014-2020, 2021-2028 i 2029-2035).

El Pla comprèn tot l'àmbit forestal de les illes Balears, constituït per més de 222.000 hectàrees de superfície forestal, el 44% del territori insular. A més, per primera vegada s'hi estudia detalladament l'estructura de la propietat forestal de la comunitat autònoma, amb 20.086 propietats forestals i 19.019 propietats agroforestals, de les quals en resulta una mitjana de 5 hectàrees per explotació forestal i 11 hectàrees per explotació agroforestal⁶.

D'altra banda, el Pla se centra en la reactivació i la reorganització del sector forestal com a motor del desenvolupament de les comarques rurals (o més aviat, com un motor més, juntament amb el que preveu la nova legislació agrària). La proposta també busca generar serveis ambientals, implantar noves iniciatives d'economia verda i posar en

²Dades aportades per la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori.

valor dels productes forestals. A més, planteja la creació d'un Comitè Forestal com a òrgan de coordinació de la política forestal amb representació dels sector, de les administracions i de la societat civil.

Pel que fa a les dades de sostenibilitat econòmica, el Pla estableix una previsió pressupostària de 185 milions d'euros per al període 2014-2020, a partir del finançament públic (europeu, nacional i autonòmic) que actualment s'aplica a les diferents actuacions en l'àmbit forestal, una quantitat voluntariosa però allunyada de les necessitats d'un sector que necessita incentivació de caràcter extraordinari per sortir de la crisi en què es troba actualment.

3.2. Pla d'Acció de Mitigació contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears (2013-2020)

És època de plans, que el paper ho suporta tot i costa menys que les inversions materials d'un determinat nivell d'ambició. Dit això, explicarem que les Illes també s'han apuntat a la lluita contra l'escalfament global, en compliment dels compromisos del Conveni sobre el canvi climàtic i els protocols de desplegament (especialment els derivats dels compromisos de Kyoto).

En aquest context de crisi econòmica ara s'ha presentat el Pla d'Acció de Mitigació contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears 2013-2020. El document va ser aprovat per acord unànim de la Comissió Interdepartamental sobre el Canvi Climàtic. Aquest òrgan, adscrit a la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori, té la finalitat de coordinar i assessorar les funcions i actuacions que, dins l'àmbit de la comunitat autònoma, afectin o puguin afectar el canvi climàtic.

Així, el Pla aprovat estableix una sèrie de mesures quantificables encaminades a mitigar de forma tangible el canvi climàtic a les illes Balears (o com a mínim aquesta és l'aspiració). L'aplicació d'aquestes mesures hauria de contribuir a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle a les illes Balears en un 23,6% el 2020, respecte de l'any de referència establert per la Unió Europea, el 2005. Aquest any a la comunitat Balear s'emeteren 9.982.410 tones de CO₂. Aquesta reducció podria arribar a ser del 30%, en el millor dels casos, fet que suposaria deixar d'emetre a l'atmosfera 2.921.251 tones de CO₂ anuals. Segons s'exposa en la presentació del document, "es tracta d'un pla realista i aplicable" i que "recull el compromís voluntari del Govern de les Illes Balears d'assumir un comportament responsable i contribuir, juntament amb l'Estat espanyol,

en el compliment dels compromisos europeus en matèria de canvi climàtic”. Com a finalitat factible el pla estableix la intenció d’assolir la reducció d’un mínim del 20% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle el 2020, sense renunciar a intentar superar aquesta xifra i arribar al 30%.

Analitzat el pla, podem comprovar que es preveuen 58 accions contra el canvi climàtic pel que fa a energia, transport, habitatge, agricultura, recursos hídrics, gestió forestal i protecció del sòl, contaminació atmosfèrica, gestió de residus, sanitat forestal, espais naturals i turisme. El pressupost estimat per a la implantació d’aquest paquet de mesures és de 1.041 milions d’euros entre els anys 2013 i 2020 (quantia que contrasta amb la destinada al Pla Forestal). El document descriu, a més, la situació actual, amb un inventari d’emissions, i analitza l’evolució de les tendències de consum energètic i d’emissions de gasos d’efecte hivernacle, fent diferents pronòstics de futur.

4. Política energètica

4.1. Les polèmiques prospeccions submarines

Mentrestant, com a paradoxa de la contradicció de les polítiques ambientals al nostre país, la política energètica a curt termini es planteja de manera diametralment oposada a la del Pla d’Acció de Mitigació contra el Canvi Climàtic a les Illes Balears, amb l’extracció de combustibles fòssils que intervenen en els processos d’escalfament global. Ens referim a les prospeccions submarines de recerca de petroli i gas.

Així, davant l’amenaça de les conseqüències ambientals de les prospeccions, el Govern ha reiterat la postura contrària als projectes en aigües balears. Mentrestant, al Congrés de Diputats, el mateix partit que dona suport al Govern de les Illes, vota a favor de les prospeccions, la presidència de Balears, fa costat a la plataforma “Balears diu no”, i manifesta la postura contrària del Govern a les prospeccions petrolieres al voltant de les illes Balears. Un autèntic monstre de dos caps difícil de justificar.

Amb tot, segons l’hemeroteca, el Govern i el moviment ciutadà “Balears diu no” coincideixen en el rebuig frontal i absolut als projectes de sondejos sísmics en el mar balear i en la necessitat d’unir esforços davant els organismes competents per aturar-los. Així, podem llegir que el conseller de Medi Ambient afirmava que des del primer moment el president del Govern havia estat molt clar rebutjant les prospeccions i que la Comissió Balear de Medi Ambient (CBMA) des de fa un any i mig s’hi ha posicionat

rotundament en contra, exigint el màxim control mediambiental⁷. Cal recordar que la CBMA havia informat negativament, tant en fase d'informació prèvia com en l'informe d'impacte ambiental, dels projectes que afectarien el golf de Lleó i el golf de València i també, en fase d'informació prèvia, del projecte que afecta el Mediterrani nord-occidental.

D'altra banda, el doble joc entre els governs de les Illes i de Madrid ha donat peu a situacions d'aparent confrontació davant la controvèrsia. Així, el Govern Balear manifestava que s'havia traslladat, en diverses ocasions, l'oposició balear a les prospeccions. El malestar a les Illes s'hauria fet arribar tant al ministre de Medi Ambient, Miguel Arias Cañete, que va assegurar que s'exigirà el màxim rigor en les avaluacions d'impacte ambiental, com al d'Indústria, José Manuel Soria, i també al comissari europeu de Medi Ambient. A Europa se li va demanar més implicació davant el cas, ja que els efectes de les prospeccions serien supranacionals, amb l'afegit de la problemàtica que es podria accentuar en un mar tancat com és el Mediterrani.

El dissabte 22 de març a les quatre illes es van dur a terme sengles manifestacions en contra de les prospeccions. De moment no hi ha res aturat.

4.2. Més aspectes sobre la incineració de residus com a combustible sòlid recuperat

Les hemeroteques també recullen novetats sobre la importació de residus com a combustible sòlid recuperat davant algunes previsions que no han reeixit. L'objectiu és recaptar uns 6,5 milions d'euros extres, per això s'impulsarà la importació amb la intenció de reduir la taxa que paga la ciutadania pel tractament dels residus.

En aquest context, el Consell de Mallorca treballa en la redacció d'un nou Pla Director Sectorial de Residus que unifica els dos que hi ha actualment: el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus Urbans de l'Illa de Mallorca, i el Pla Director Sectorial per a la Gestió de Residus de Construcció, Demolició, Voluminosos i Pneumàtics Fora d'Ús de l'Illa de Mallorca. El nom del nou pla unificat serà: Pla Director Sectorial per a la Gestió dels Residus no Perillosos a Mallorca. El marc aplicable és el dels residus no

³*Diario de Mallorca*: <<http://www.diariodemallorca.es/mallorca/2014/02/20/bauza-pide-inventen-formulas-parar/912725.html>>.

Diari Última Hora: <<http://ultimahora.es/mallorca/noticias/local/2014/118481/company-pide-implique-prospecciones-petroliferas-por-efectos-supranacionales.html>>.

Diari de Balears: <<http://dbalears.cat/actualitat/balears/company-assegura-els-efectes-les-prospeccions-mediterrania-seran-supranacionals.html>>.

perillosos generats als domicilis i a les activitats comercials i industrials de l'illa, i defineix l'àmbit material objecte del pla mitjançant un llistat molt precís.

El pla obre la porta al tractament de residus no procedents de Mallorca (especialment que s'hagin generat a les altres illes), i a la incineració per generar energia de combustibles derivats de residus, en el marc de la Llei 13/2012, de 20 de novembre, de mesures urgents per a l'activació econòmica pel que fa a indústria i energia, noves tecnologies, residus, aigües, altres activitats i mesures tributàries, que en l'article 19 estableix:

«Article 19

Trasllat i tractament de combustible derivat de residus que provenen de la Unió Europea El trasllat de combustible derivat de residus (codis LER 19.12.10 i 19.12.12) provinents de fora de les Illes Balears i dins l'àmbit de la Unió Europea, per al seu tractament en plantes o instal·lacions de gestió pública previstes en el Pla director sectorial per a la gestió dels residus urbans de l'illa de Mallorca, només es pot fer amb l'autorització de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, de conformitat amb el que estableixen els articles 12.4.d) i 25 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. El tractament ha de dur-lo a terme el servei públic insular, amb la conformitat prèvia del seu titular.

Els ingressos derivats d'aquest tractament han de ser íntegrament aplicats al finançament del preu general que han de satisfer els usuaris del servei públic».

Així, doncs, el Pla Director Sectorial, de manera indirecta, recull i consolida la previsió d'importació de l'anomenat combustible sòlid recuperat procedent de residus, amb destinació a la incineració i cogeneració energètica.

5. Altres notícies ambientals

5.1. La restauració forestal de la serra de Tramuntana

Com hem reiterat en aquestes pàgines, els incendis forestals suposen un drama paisatgístic i ambiental per a les Illes, molt preocupades per la imatge com a producte turístic. Els sol fet de viure un incendi en temporada alta i a prop de zones turístiques és viscut com un contratemps que imprimeix en els visitants una imatge negativa.

Un dels incendis més grans viscuts històricament a les Illes va ser el de la serra de Tramuntana de l'any passat. El foc romangué actiu des del 26 de juliol fins al 13 d'agost del 2013, tot i que es considerà sota control des del 2 d'agost. L'incendi cremà un total de 2.335 hectàrees dels municipis d'Andratx, Estellencs i Calvià, i cremà aproximadament

un 2% de la serra de Tramuntana, i es considera el més important de la història de les illes Balears.

L'efecte social de l'incendi, a banda de l'econòmic i l'ambiental, va comportar la traducció d'aquest impacte en una manifestació de solidaritat col·lectiva. L'Administració autonòmica, conscient d'aquesta reacció popular, va reaccionar ràpidament, va crear la "Comissió Tot(s) per sa Serra!" i va instaurar el Pla de Restauració Ambiental de la Serra de Tramuntana, instrument elaborat pel Servei de Gestió Forestal i que es va estructurar en cinc grans eixos d'actuació: seguretat de persones i béns, lluita contra l'erosió, suport a la regeneració forestal i agrícola, recuperació d'hàbitats i sensibilització sobre el risc d'incendi forestal.

El pla s'està aplicant mitjançant tasques professionals de les brigades de l'Institut Balear de la Natura (IBANAT) i diferents programes de voluntariats, a més de tasques realitzades per alguns propietaris de la zona afectada. En la fase actual, els treballs són finançats en part pel Ministeri d'Agricultura, Medi Ambient i Alimentació, que preveu inversions per un total de 350.000 euros; aquestes feines se centren en la restauració ambiental d'unes 150 hectàrees de finques afectades, tant de titularitat pública com privada.

D'una banda, s'actua en una extensió de 75 ha, on es retira i s'elimina la fusta cremada amb el triturat de troncs i branques que es reparteix pel mateix terreny amb la finalitat d'adobar el sòl. Alhora, es construeixen dics petits de fusta per evitar l'erosió del terreny en una superfície de 60 ha, es restableix l'arbrat en unes 10 ha i es recuperen unes 5 ha de conreus en bancals. El pla també preveu actuacions que inclouen tasques de rehabilitació de camins i de lluita contra la propagació de plagues forestals al llarg del perímetre de l'incendi.

Igualment, una de les línies de prevenció consisteix en el tractament de franges de seguretat a banda i banda de les carreteres, lloc on els incendis poden tenir el seu origen. En aquesta fase s'està actuant al tram de la carretera Ma10 entre Andratx i Estellencs afectat per l'incendi forestal. Concretament, les feines consisteixen a retirar i eliminar tots els arbres cremats i el combustible vegetal en una franja d'uns 20 metres a banda i banda de la carretera, en un tram de 12 quilòmetres, compresos entre els quilòmetres 98 i 110, que representen una superfície total de 40 hectàrees. Els objectius són evitar incidents provocats per la possible caiguda d'arbres sobre la calçada i crear un espai que eviti la propagació de les flames en cas d'incendi forestal.

Les actuacions de lluita i prevenció de l'erosió del sòl, es duen a terme amb accions de les brigades forestals d'IBANAT i mitjançant feines coordinades amb grups de voluntaris, que han intervingut en una superfície de 15 ha de les 40 previstes. Es tracta d'intervenir en zones de forts pendents amb la finalitat d'evitar la pèrdua de sòl i el consegüent efecte erosiu.

Es preveu continuar actuant mentre no s'exhaureixin els objectius del Pla.

5.2. L'oposició a la política de carreteres al Consell de Menorca

A l'illa de Menorca s'està projectant una ampliació de la carretera general de Maó a Ciutadella (Me-1), que ha de comportar la construcció de sis enormes rotondes amb més de 200 faroles que les il·luminaran, i els corresponents accessos i vials de serveis. Les obres s'emmarquen en el Conveni de carreteres entre el Ministeri de Foment i el Consell Insular de Menorca, que s'allargarà fins al 2017.

Al maig de 2014 s'iniciaran les obres del primer tram (Maó-Alaior) sense que s'hagi escoltat la forta oposició que ha generat el projecte. Aquesta proposta ha estat considerada desproporcionada per una part significativa de la població, que ha manifestat reiteradament el rebuig a l'obra i ha constituït una plataforma ciutadana anomenada "Així, no". Aquesta oposició ha propiciat el fet que l'adjudicatària de les obres hagi redimensionat la proposta inicial del Consell de Menorca reduint a la meitat les rotondes i realitzant millores d'integració, cosa que a més implica la reducció del cost en un 8%. El cost d'aquest primer tram, que abraça una quarta part del total, serà de 7,5 milions d'euros, un cost que la plataforma considera innecessari en una època on hi ha altres prioritats.

El projecte qüestionat ha mobilitzat diferents accions de protesta, com ara caminades per la carretera o concentracions i manifestacions a les principals poblacions de l'illa. La plataforma i el principal grup ecologista de Menorca (GOB), lamenten l'escàs tarannà dialogant del conseller responsable, que ha demostrat públicament posicions intransigents i, en alguns escrits en premsa, fins i tot impropis d'un càrrec institucional.

5.3. Extracció de fangs contaminats al port de Maó

També Menorca és escenari d'una altra polèmica acció amb repercussions ambientals. I és que l'Autoritat Portuària de Maó ha projectat el dragat del port de la ciutat amb l'extracció i el dipòsit a terra de fangs contaminats procedents dels fons marins. L'acció ha començat i els primers metres cúbics s'han dipositat sobre el moll del Cós Nou, a punt de ser traslladats a l'abocador de Milà de manera controlada. Quan s'hagin extret els 29.000 m³ projectats, s'haurà aconseguit una descontaminació molt important del port de Maó, el problema és el tractament dels residus i els efectes del dragat en les aigües del port.

El projecte de dragatge del port maonès ha estat motiu de polèmica en els darrers anys, a causa de la presència de metalls pesants en els fons, fruit dels abocaments històrics procedents, fonamentalment, de la indústria de bijuteria al llarg de les dècades dels anys 1960-1970, quan no hi havia pràcticament cap control i les aigües residuals es descarregaven directament a la rada.

La mobilització ciutadana ha cursat repetides denúncies, i ha sol·licitat la intervenció de la Fiscalia de Medi Ambient i la renovació de la cúpula de l'Autoritat Portuària. Finalment, les converses promogudes des de la iniciativa popular i les organitzacions ecologistes, van permetre finalment un acord entre l'Administració i el GOB, per tal d'extreure a terra els fangs especialment contaminats i evitar el dipòsit al fons del mar en la costa del sud de Menorca. Aquest abocament al mar només serà possible per als fangs que compleixin la normativa internacional de referència, més restrictiva que l'espanyola (unes sis vegades més exigents que la que se sol aplicar als ports espanyols), i amb nombroses garanties de seguiment i seguretat. Així, l'abocament previst al mar es realitza arran dels estudis fets per l'Institut Oceanogràfic, que analitzà tota la zona marina entre la Mola i l'Illa de l'Aire. Així, doncs, els fangs s'aboquen a més d'una milla de la costa en una àrea senyalitzada per una boia permanent dotada d'un aparell que mesura els corrents submarins i envia el senyal d'aturar el dragatge si hi ha risc de desplaçament dels materials cap a altres zones no protegides.

Les previsions són que s'extrauran uns 8.000 m³ que no eren necessaris per guanyar calat, però, atès que presenten importants concentracions de mercuri, es retiraran com a operació de descontaminació amb la finalitat que una part del vigor natural que va perdre el port a causa dels abocaments industrials dels anys seixanta i setanta, es pugui restaurar.

D'altra banda, i pel que fa a l'abocament a la terra, s'ha habilitat un tancat sobre el Cós Nou, perquè els fangs es puguin assecar sense perdre el control dels llims. La darrera ampliació de l'abocador de Milà ofereix moltes garanties ambientals per rebre aquest material. Com que Milà està envoltat de terrenys qualificats de Xarxa Natura 2000, l'ampliació es va fer sota importants exigències europees, de manera que és una àrea totalment impermeabilitzada i dotada d'una depuradora química que impedeix qualsevol sortida de contaminants.

El material dragat, una vegada assecat, podrà substituir les camionades de terres i inerts que s'han de dur a l'abocador de manera permanent per establitzar els residus urbans no reciclables que s'hi dipositen. Per tant, no ocuparan l'espai destinat a residus.

L'acord inclou l'autorització al GOB perquè segueixi de manera permanent l'operació, amb la utilització de càmeres i sistemes informàtics, que registren l'activitat diàriament.

5.4. Polítiques de conservació al Parc Natural de ses Salines d'Eivissa i Formentera: les línies elèctriques

La presència de línies elèctriques en zones freqüentades per aus pot ser la causa de nombrosos casos d'electrocució. S'han realitzat molts estudis destinats a avaluar el disseny i la ubicació de les esteses elèctriques per minimitzar la mort d'ocells.

En el cas d'Eivissa, un dels llocs més vulnerables és el Parc Natural de ses Salines, zona humida de gran valor ecològic, santuari de moltes espècies d'aus, declarada també zona d'especial protecció per a les aus (ZEPA). Una de les ubicacions on la incidència d'electrocució és més gran és la zona coneguda com la Sal Rosa.

Malgrat la feina d'anys d'estudi i seguiment, que ha propiciat una reducció sensible d'electrocucions, resten punts negres que cal resoldre. Efectivament, hi ha un petit conjunt de línies elèctriques que causen un gran impacte i la mortalitat d'espècies tan rellevants com els flamencs o el xarxet marbrenc (*Marmaronetta angustirostris*). Aquesta problemàtica, concentrada essencialment en les esteses elèctriques que travessen els estanys de Sal Rosa, ha estat reiteradament denunciada sense que s'albiri cap mena de solució a curt termini. D'altra banda, aquesta inacció implica l'incompliment de les previsions del Pla Rector d'Ús i Gestió, aprovat mitjançant el Decret 132/2005, que obliga a soterrar les esteses assenyalades abans del desembre de

2008 o desembre de 2010, en funció de la seva tensió. Com denuncia l'organització ecologista GEN-GOB, l'anòmala situació d'incompliment, actualment es manté.

Els estudis realitzats han pogut constatar la mort d'un nombre significatiu d'exemplars de diferents espècies en aquest punt, sobretot per col·lisió. Les aus afectades inclouen exemplars de flamenc, gamba roja vulgar, mussol emigrant i diferents anàtids, fins i tot, de xarxet marbrenc, una espècie catalogada i en perill d'extinció i que forma part, amb altres espècies, del Pla Homeyer⁸, amb el qual la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient i Territori desplega els corresponents plans de conservació.

Les denúncies fetes públiques varen propiciar el fet que uns tres quilòmetres de línia rebessin la instal·lació de sistemes per reduir la possibilitat de col·lisió, mitjançant la instal·lació dels anomenats "salvaocells" de tipus espiral. El problema és que la intervenció no es va dur a terme en el tram realment conflictiu. Efectivament, els dispositius es van instal·lar en trams anteriors i posteriors als estanys de Sal Rosa, deixant una discontinuïtat sense actuació, d'uns 200 metres. Segons l'entitat ecologista, es tracta dels 200 metres on es concentra el 100% de la mortalitat en aquesta línia. Malauradament la deficient actuació ja té resultats clars, i en el poc temps que ha transcorregut de 2014 es comptabilitzen baixes d'espècies d'interès. El darrer exemplar reportat és un flamenc anellat que va morir per haver col·lidit a les esteses de Sal Rosa i va ser localitzat el passat 2 de febrer.

5.5. Crida d'atenció per la política de prevenció d'incendis forestals

Com a comentari de darrera hora, cal advertir que els primers incendis forestals han arribat, la qual cosa, especialment a Eivissa, ha disparat les alarmes davant una situació de sequera preocupant.

El problema és la desinversió en tasques de prevenció i l'accent en els dispositius d'extinció. Alguns documents de la planificació forestal a les Illes fan palesa la premissa que "els incendis forestals s'apaguen a l'hivern", en referència a les actuacions de prevenció, neteja i descàrrega de material piròfit a les zones més comunes d'origen del foc.

⁴Resolució del conseller de Medi Ambient de 26 de novembre de 2008 per la qual s'aproven els plans de recuperació de *Vicia bifoliolata*, de les aus aquàtiques en perill d'extinció (Pla Homeyer), el Pla de Conservació de la Flora Vasculat del Puig Major i els plans de maneig del *Teix Taxus baccata* i del voltor negre (*Aegypius monachus*). BOIB núm. 171 del 06/12/2008.

La política de reducció del dèficit públic, malgrat que es digui el contrari, ha fet que s'hagi mantingut la despesa en el dispositiu d'extinció, però han minvat les actuacions de prevenció, mentre que el més recomanable, a la vista de les campanyes passades, hauria estat incrementar la despesa i les actuacions pel que fa a prevenció. Els esforços s'han concentrat en bona part en la restauració de la serra de Tramuntana afectada per l'incendi de juliol de 2013, i s'han deixat de banda intervencions en altres indrets.

Igualment, amb un dels incendis d'Eivissa es va encetar la polèmica al voltant de la distribució dels mitjans d'extinció, principalment concentrats a l'illa de Mallorca amb un caràcter de mobilitat interinsular que els fa, a priori, més polivalents.